



Estudio de Impacto Ambiental para la perforación del pozo exploratorio EQN.MC.A.x-1 en CAN_100

Capítulo III - Marco Legal e Institucional

Junio de 2022

Proyecto No.: 0582679

Detalles del documento	
Título del documento	Estudio de Impacto Ambiental para la perforación del pozo exploratorio EQN.MC.A.x-1 en CAN_100
Subtítulo del documento	Capítulo III - Marco Legal e Institucional
Proyecto No.	0582679
Fecha	30 Junio 2022
Versión	2.0
Autores originales Revisión actual	Paula Roberts, Rocío Sánchez; Juliana Ramos, Andrea Fernandez Sanday, Luisa Pérez Gorospe, Juan Simonelli
Nombre del cliente	EQUINOR ARGENTINA B.V. Sucursal Argentina

ÍNDICE

Lista de Figuras	ii
Abreviaturas y Acrónimos	iii
3. MARCO NORMATIVO	5
3.1 Objetivo.....	5
3.2 Introducción	5
3.3 Aspectos Normativos Ambientales y Administrativos	5
3.4 Marco Legal Ambiental	7
3.4.1 Constitución Nacional	7
3.4.2 Tratados, convenciones y acuerdos internacionales y regionales	8
3.4.3 Normas de presupuestos mínimos de protección ambiental	18
3.4.4 Gestión ambiental en actividades de petróleo y gas	23
3.4.5 Gestión ambiental para actividades marítimas	26
3.4.6 Residuos peligrosos y oleosos.....	37
3.4.7 Residuos no peligrosos.....	40
3.4.8 Efluentes líquidos y calidad del agua	42
3.4.9 Flora y fauna	42
3.5 Marco General para las Actividades de Petróleo y Gas	47
3.5.1 Ley 17.319 - Ley Federal de Hidrocarburos.....	47
3.5.2 Abandono de pozos de hidrocarburos	47
3.5.3 Protección del medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos.....	48
3.5.4 Guías y recomendaciones para la ejecución de los Estudios Ambientales y Monitoreo de Obras y Tareas	48
3.5.5 Asuntos de jurisdicción y competencia	48
3.6 Marco Jurídico relacionado con el Patrimonio Cultural	50
3.7 Marco Jurídico relacionado con la Salud y la Seguridad	50
3.7.1 Salud y seguridad	50
3.7.2 Sustancias peligrosas	52
3.7.3 Almacenamiento de petróleo	53
3.8 Marco Legal sobre el Área de Exploración/Explotación "CAN_100"	53
3.9 Estándares Internacionales	54
3.9.1 Guías sobre Ambiente, Salud y Seguridad para el Desarrollo de Petróleo y Gas Costa afuera de la Corporación Financiera Internacional	54
3.10 Estándares Corporativos	55
3.10.1 Sistema de gestión ambiental de Equinor.....	55
3.10.2 El Libro de Equinor	57
3.10.3 Requerimientos de función	57
3.10.4 Requerimientos y recomendaciones.....	57
3.10.5 Gestión de riesgos	58
3.10.6 Monitoreo de desempeño	58
3.10.7 Política de salud, seguridad y medio ambiente.....	58
3.10.8 Código de conducta	59
3.11 Marco institucional	60
3.12 Principios de adhesión voluntaria	61
3.12.1 Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y los Derechos Humanos	61
3.12.2 Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos	62
3.12.3 Pacto Mundial de las Naciones Unidas.....	62
3.12.4 Organización Internacional del Trabajo (OIT)	63
3.12.5 Asociación Global para los Aspectos Ambientales y Sociales de la Industria del Gas y el Petróleo.....	63
3.12.6 Acuerdo de París	63

3.12.7	Plataforma empresarial de acción oceánica sostenible de Naciones Unidas	63
3.12.8	Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030	64
3.13	Certificaciones de procedimientos y certificaciones de capacitación personal	64

Lista de Figuras

Figura 3-1: Jerarquía del sistema de gestión de Equinor	56
---	----

Abreviaturas y Acrónimos

Nombre	Descripción
AMP	Áreas Marinas Protegidas
APN	Administración de Parques Nacionales
ART	Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
CELOCODECON	Centro Local de Control de Derrames Contaminantes
CENACODECON	Centro Nacional de Control de Derrames Contaminantes
CEZOCODECON	Centro Zonal de Control de Derrames Contaminantes
CFP	Consejo Federal Pesquero
CITES	Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
CMP	Captura Máxima Permisible
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
CN	Constitución Nacional
DJPM	Dirección de Policía Judicial de la Prefectura Naval Argentina
DPMA	Dirección Provincial de Medio Ambiente de la Prefectura Naval Argentina
DIA	Declaración de Impacto Ambiental
EIA	Evaluación de Impacto Ambiental
ERM	Environmental Resources Management
EsIA	Estudio de Impacto Ambiental
GHS	Etiquetado de Productos Químicos
GMC	Grupo de Mercado Común
GTRB	Plan de Gestión de Trazabilidad de los Residuos provenientes de los buques
INAPL	Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano
INIDEP	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
IPCC	Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
LBA	Línea de Base Ambiental
LRB	Libro de Registro de Basuras
MAGyP	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
MARPOL	Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques
MASS	Medio Ambiente, Salud y Seguridad
MAyDS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
nmi	millas náuticas
MEPC	Comité de Protección del Medio Marino
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
mm	milímetros
MSC	Comité de Seguridad Marítima
OMI	Organización Marítima Internacional
OPDS	Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
PCBs	Policlorobifenilos
PGA	Plan de Gestión Ambiental

PLANACON	Plan Nacional de Contingencia
PNA	Prefectura Naval Argentina
ppm	partes por millón
PROAS	Programa de Arqueología Subacuática
REGINAVE	Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre
SEN	Secretaría de Energía de la Nación
SETyC	Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones
SGA	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación
SGAyDS	Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable
SGE	Secretaría de Gobierno de Energía
SRT	Superintendencia de Riesgos del Trabajo
SSPyA	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
TAT	Tonelaje de Arqueo Total
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
ZEE	Zona Económica Exclusiva

3. MARCO NORMATIVO

3.1 Objetivo

Este capítulo tiene como objetivo presentar el marco legal nacional y provincial aplicable al proyecto de perforación de un pozo exploratorio EQN.MC.A.x-1 (Argerich-1) en el área CAN_100. Además, presenta la estructura institucional en la que se enmarca y las normas corporativas de adhesión voluntaria con los que trabaja Equinor.

3.2 Introducción

El sistema normativo de la República Argentina se estructura en una organización normativa compleja, integrada por reglamentos de diferentes grados y órdenes, como consecuencia de la organización federal del Estado. La base normativa está constituida por la Constitución Nacional, mediante la cual las provincias han delegado determinadas facultades a la Nación, reservándose aquellas que no fueron expresamente delegadas.

Siguiendo dicho orden, y con el fin de facilitar el acercamiento a la legislación aplicable al Proyecto en análisis, este informe se ha estructurado de la siguiente manera.

En primer lugar, se presenta una sección denominada Aspectos Normativos Ambientales y Administrativos en el que se desarrollan brevemente los aspectos normativos ambientales y administrativos más relevantes aplicables al Proyecto de exploración en alta mar en estudio, incluyendo el análisis de la jurisdicción aplicable al Proyecto.

A continuación, se describe el Marco Legal sobre el Medio Ambiente aplicable al Proyecto en análisis, que incluye normativas ambientales de diferentes grados y órdenes, las cuales han sido agrupadas por temáticas (actividad de hidrocarburos, actividad marítima, etc.).

Luego, se incluye el desarrollo del Marco Normativo General de la Actividad de Hidrocarburos y el Marco Normativo General de la Actividad Marítima, donde se revisan las normas que establecen las bases para el ejercicio de las actividades mencionadas. A continuación, se revisa el Marco Legal de Seguridad y Salud Ocupacional en el trabajo e instalaciones, el marco legal relacionado con el Patrimonio Cultural, las normas internacionales consideradas, las certificaciones de Procedimientos y Normas Corporativas de Equinor, y el marco institucional del Proyecto.

3.3 Aspectos Normativos Ambientales y Administrativos

En la siguiente sección se desarrollará una descripción de los aspectos normativos ambientales y administrativos más relevantes aplicables al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de perforación de un pozo exploratorio (Argerich-1) en el área CAN_100, incluyendo un análisis de la jurisdicción que le sea aplicable y la indicación de la autoridad competente, si se define.

Como marco conceptual general, cabe señalar que la actividad nacional de hidrocarburos se encuentra regulada por la Ley Nacional de Hidrocarburos, Ley 17.319, y su reglamento normativo, complementario y modificadorio.

El Artículo 1 de la Ley 17.319, modificada por la Ley 26.197 del 5 de enero de 2007, establece que:

"Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren.

Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley N.º 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental.

Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley N.º 23.968.

Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio.

Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda a sus respectivas jurisdicciones, los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en el lecho y el subsuelo del Río de la Plata, desde la costa hasta una distancia máxima de DOCE (12) millas marinas que no supere la línea establecida en el artículo 41 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y de conformidad con las normas establecidas en el Capítulo VII de ese instrumento.

Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley N.º 23.968, respetando lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994, entre la referida provincia y la provincia de Santa Cruz.”

El Proyecto se desarrollará en la plataforma marina de la República Argentina, que se extiende desde las 12 millas náuticas establecidas como límite para la jurisdicción provincial, hasta las 200 millas náuticas. Por lo tanto, el Proyecto se desarrollará, de acuerdo con lo establecido en la Ley 17.319, en aguas de jurisdicción del Estado Nacional. Por lo anterior, el Proyecto se sujetará a la normativa nacional que rija la materia y a la obtención de los correspondientes permisos y concesiones de la Autoridad Nacional competente.

Por otro lado, el Proyecto también debe considerar la normativa nacional sobre la actividad marítima y portuaria, ya que la Nación tiene la facultad de legislar sobre la navegación interprovincial y extranjera y la autorización portuaria.

Asimismo, durante la ejecución del Proyecto, se tendrá en cuenta toda la normativa que emita la Prefectura Naval Argentina (PNA), que aplica en el ejercicio del servicio de policía de seguridad en la navegación, policía de seguridad y judicial y, en parte, la jurisdicción administrativa de navegación, por expreso mandato de la Ley 18.398.

En línea con lo anterior, el Estudio de Impacto Ambiental (EslA) debe elaborarse teniendo en cuenta, principalmente en términos procesales, la Resolución Conjunta de la anterior Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SGAyDS) y la anterior Secretaría de Gobierno de Energía (SGE), Resolución 3/2019, ya que por la ubicación del área operativa a la que se refiere este proyecto, la jurisdicción aplicable es la nacional; así como las previsiones establecidas en la Resolución SE 25/2004 – “Normas para la Presentación de Estudios Ambientales Correspondientes a Permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos”¹. Adicionalmente, en la elaboración del EslA se han considerado las disposiciones contenidas en la Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (Resolución 337/2019) y otros documentos relevantes.

¹ Al respecto, el tercer párrafo del Artículo 1 de la Resolución N° 3/2019 establece “La estructura y contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de perforación de pozos exploratorios y explotación hidrocarburífera, incluyendo perforación y abandono de pozos y desafectación de instalaciones se regirá por lo dispuesto por el Apartado 3 “Estructura del Estudio Ambiental” del Anexo de la Resolución N° 25 del 12 de enero de 2004 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.”

3.4 Marco Legal Ambiental

3.4.1 Constitución Nacional

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incluyó dentro del Capítulo Segundo "Nuevos Derechos y Garantías" dos artículos que abordan directamente el tema ambiental y su protección, a saber:

Artículo 41

"Todos los habitantes gozan del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, adecuado para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de reparar, según establece la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contienen los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que estas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y radiactivos".

Artículo 43

"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminentemente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio."

Por su parte, la Constitución Nacional define en otras secciones el mapa de distribución de competencias entre los gobiernos federal y provinciales, que en lo que a este Proyecto afecta, se puede resumir citando el texto de los artículos 121, 124 y 75 inciso 12 y 15 respectivamente, que determinan que:

"Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al momento de su constitución" (Artículo 121).

"Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio" (Artículo 124, segundo párrafo).

"Corresponde al Congreso:

[...] 12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; [...] (Artículo 75, inciso 12).

[...] 15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias. [...]” (Artículo 75, inciso 15).

3.4.2 Tratados, convenciones y acuerdos internacionales y regionales

La República Argentina ha ratificado numerosos tratados, convenciones y acuerdos internacionales y regionales con otros Estados, que constituyen una fuente de derecho de suma importancia para el sistema normativo jurídico nacional.

Como tales, estos instrumentos (y las normativas nacionales que los incorporan al régimen legal local) establecen directrices generales y definen el marco para la interpretación de las normativas locales emitidas en consecuencia.

3.4.2.1 Políticas ambientales

Acuerdo Marco MERCOSUR sobre Medio Ambiente

A nivel regional, la República Argentina forma parte del bloque denominado MERCOSUR (Mercado Común del Sur), y como tal, ha suscrito el “Acuerdo Marco MERCOSUR sobre Medio Ambiente”, el cual fue incorporado al régimen jurídico nacional a través de la Ley 25.841. Como miembro, todas las resoluciones emitidas por los órganos del MERCOSUR son aplicables a la República Argentina.

Entre estas resoluciones, cabe destacar la Resolución GMC 10/1994 que aprobó las Directrices Básicas de Política Ambiental y la Resolución GMC 7/1998 sobre Emergencias Ambientales. En particular, el Anexo de la Resolución 10/1994 establece que los miembros deben garantizar la adopción de prácticas amigables con el medio ambiente. Como ejemplo de esto, se pueden mencionar las directrices nacionales de buenas prácticas en estudio de impacto, los cuales fueron tomados en cuenta para la elaboración de este EsiA.

3.4.2.2 Actividades marítimas

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/1978)

Esta Organización Marítima Internacional ha desarrollado el tratado mundial más importante para la prevención de la contaminación por los buques: el Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques (conocido como MARPOL, por sus siglas en inglés). La Ley 24.089, sancionada el 3 de junio de 1992, aprueba el “Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973”, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), designando a la Prefectura Naval Argentina como su autoridad competente.

MARPOL cubre todos los aspectos técnicos de la contaminación de los buques que son operaciones normales para buques y embarcaciones.

Las normativas de descarga de MARPOL se aplican a buques y embarcaciones de todos los tamaños. Otras normativas establecen las normas para el diseño y construcción de buques, equipo que debe instalarse y mantenerse en los buques y establece un sistema de certificación e inspecciones. MARPOL también incluye la obligación de los países que son Partes de proporcionar instalaciones portuarias de recepción para la eliminación de residuos generados por buques. También existen requisitos específicos en los buques para el mantenimiento de registros, planes de gestión y procedimientos que deben seguir los marinos que trabajan en los buques.

MARPOL aborda cuestiones técnicas y requisitos específicos para la prevención de diversos tipos de contaminación procedente de los buques. Estos están contenidos en seis anexos:

MARPOL 73/78

Anexo I	Petróleo
Anexo II	Sustancias líquidas nocivas a granel
Anexo III	Sustancias nocivas en forma envasada
Anexo IV	Aguas sucias
Anexo V	Basura
Anexo VI	Aire

Para este proyecto se aplican los reglamentos incluidos en los Anexos I, IV, V y VI.

El referido Convenio establece en su Anexo I “Normas para Prevenir la Contaminación por Hidrocarburos” una serie de prescripciones para los buques y plataformas fijas o flotantes, dedicados a la exploración, explotación y consecuente tratamiento en alta mar, de los recursos minerales del fondo marino.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Regla 9 (Control de descargas de hidrocarburos) del Anexo I, de la Ley 24.089, se prohibirá la descarga al mar de hidrocarburos o mezclas oleosas excepto cuando se cumplan las condiciones indicadas en el párrafo 1b), todos los cuales se cumplen en el caso del proyecto de perforación de Equinor en CAN_100, a saber:

1) b) En el caso de buques no petroleros, cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas y buques petroleros con respecto a las aguas de sentina de los espacios de máquinas, excepto los de la cámara de bombas de carga a menos que dichas aguas sean mezcladas con residuos de carga de hidrocarburos;

- i. que el buque no se encuentra en una zona especial (caso incluido en este Proyecto);
- ii. la embarcación se encuentra a más de 12 millas náuticas de la tierra más cercana;
- iii. el buque está en ruta;
- iv. el contenido de hidrocarburos del efluente es inferior a 100 partes por millón; y
- v. el buque cuente con un dispositivo operativo para el seguimiento y control de las descargas de hidrocarburos, equipo para la separación de agua e hidrocarburos, un sistema de filtración de hidrocarburos o alguna otra instalación según lo establecido en la Regla 16 de este Anexo.

Las disposiciones del párrafo 1) de esta regla no se aplicarán a las descargas de lastre limpias o separadas. Las disposiciones del párrafo 1) b) de esta regla no se aplicarán a las descargas de mezclas oleosas que, sin diluir, tengan un contenido de hidrocarburos que no exceda de 15 partes por millón.

A pesar de que el marco de la Ley 24.089 exige que el contenido de las descargas de hidrocarburos del efluente sea menor a 100 partes por millón en las condiciones mencionadas anteriormente en el punto 1) b) de la Regla 9; de acuerdo con las normas de la empresa Equinor, sus operaciones requieren la aplicación de al menos los requisitos del Convenio MARPOL 73/78, por lo que se cumplirá que las descargas de mezclas oleosas, sin dilución, tengan un contenido de hidrocarburos que no pase 15 partes por millón.

La Regla 12 (instalaciones y servicios de recepción) del Anexo I de la Ley 24.089, por su parte, se aplica a la hora de seleccionar el Puerto que funcionará como base logística, ya que establece las condiciones para las Instalaciones y servicios de recepción. Son especialmente importantes si se tiene en cuenta que no todos los residuos pueden descargarse en alta mar. Por ejemplo, el puerto debe contar con servicios e instalaciones para la recepción de residuos y mezclas oleosas que permanezcan a bordo de buques petroleros y otros buques, con capacidad adecuada para que los buques que los

utilicen no tengan que sufrir retrasos innecesarios. Asimismo, los puertos pueden recibir agua de sentina contaminada (párrafo e).

El Anexo IV de la Ley 24.089, establece las "Normas para Prevenir la Contaminación por Aguas Sucias de los Buques". La Regla 8 de dicho Anexo prohíbe la descarga de aguas sucias al mar a menos que se cumplan las condiciones establecidas en el mismo.

- La embarcación podrá descargar a una distancia superior a 4 millas náuticas si las aguas sucias han sido previamente trituradas y desinfectadas mediante un sistema certificado, o a una distancia superior a 12 millas náuticas si no han sido previamente trituradas o desinfectadas. En todo caso, las aguas sucias que hayan sido almacenadas en cisternas no serán vertidas de manera inmediata, sino por un régimen moderado, con el buque navegando a una velocidad no inferior a 4 nudos.

Adicionalmente, la Ley 24.089 establece en su Anexo V las "Reglas para Prevenir la Contaminación por Basura de Buques". De acuerdo con la definición contenida en dicho Anexo, se entiende por "basura" "todo tipo de restos de alimentos – excepto el pescado fresco y sus porciones –, así como los residuos resultantes de las labores domésticas y labores rutinarias del buque en condiciones normales de servicio, que se suelen verter de manera continua o periódica". Se determina expresamente que el término no incluye las sustancias definidas o listadas en otros Anexos de dicho Convenio.

La Regla 2 especifica que el alcance de las disposiciones del Anexo V se aplica a todos los buques. La Regla 4 del Anexo V antes mencionado, establece una serie de requisitos especiales para la disposición de basura.

Estas reglas se aplican igualmente a las instalaciones en alta mar. De hecho, el régimen de prevención de la contaminación de las instalaciones en alta mar es considerablemente más estricto que el de los buques marítimos. Si bien el Anexo V permite, en determinadas condiciones, la eliminación en el mar de determinados tipos de basura, incluidos los materiales de revestimiento y embalaje, los residuos alimenticios y otras basuras de los buques. Esto no se aplica a las plataformas.

En el caso de embarcaciones, se permite la descarga de residuos alimenticios en las siguientes condiciones:

- El buque debe estar navegando o en movimiento;
- Para los residuos alimenticios procesados a través de una picadora o trituradora (capaz de pasar a través de una criba con aberturas no mayores de 25 milímetros (mm), la descarga debe ser al menos a 3 millas náuticas (nmi) de la tierra más cercana;
- Para los residuos alimenticios que no hayan sido procesados a través de una picadora o trituradora, la descarga debe ser al menos a 12 millas náuticas de la tierra más cercana.

En el caso de plataformas fijas o flotantes, se permite la descarga de residuos alimenticios en las siguientes condiciones:

- Más de 12 nmi de la tierra más cercana. Los residuos alimenticios se picarán o triturarán y podrán pasar a través de una criba con aberturas no superiores a 25 mm.

En 1997 se convocó una conferencia diplomática con el fin de incorporar a la Convención, el nuevo Anexo VI sobre Prevención de la Contaminación por Emisiones Gaseosas de los Buques, que considera sustancias que agotan la capa de ozono atmosférico, la generación de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, (que producen lluvia ácida), contaminación por vapores de compuestos orgánicos y generación de gases de efecto invernadero.

Este Protocolo se encuentra vigente a nivel internacional desde el 19 de mayo de 2005 y fue aprobado por Disposición de la Prefectura Naval Argentina "PNA UR 9 23/12" el 15 de noviembre de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 21 de noviembre de 2012.

Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos

La Ley 24.292 ratificó el "Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos" (OPRC, por sus siglas en inglés), adoptado por la Conferencia de la Organización Marítima Internacional (OMI), en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Artículo 3 de la mencionada Convención establece que cada Parte debe exigir a todas las embarcaciones que tengan derecho a enarbolar su pabellón y a las autoridades y empresas encargadas de los puertos marítimos e instalaciones de manejo de hidrocarburos bajo su jurisdicción, que cuenten con planes de emergencia en caso de contaminación por petróleo. Asimismo, cada Parte exigirá que las empresas operadoras de las unidades en alta mar bajo su jurisdicción cuenten con planes de emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos, coordinados con los sistemas nacionales establecidos de acuerdo con los procedimientos que determine la autoridad nacional competente.

El Artículo 4 establece que las Partes de este Convenio requerirán a los capitanes y responsables de los buques que enarbolan su pabellón, así como a los responsables de una unidad en alta mar sujeta a su jurisdicción, que notifiquen sin demora cualquier evento ocurrido en sus buques o unidades en alta mar, u observados en el mar, que ha producido o es probable que produzca una descarga de hidrocarburos. En el caso de un buque, debería notificarse al Estado ribereño más cercano. Cada Parte requerirá a los responsables de puertos marítimos e instalaciones de manejo de hidrocarburos sujetos a su jurisdicción, que notifiquen inmediatamente a la autoridad nacional competente de cualquier evento que haya producido o pueda producir una descarga de hidrocarburos o dé lugar a la presencia de hidrocarburos.

Asimismo, el Artículo 6 de esta Convención establece que cada Parte debe establecer un sistema nacional para atender de manera oportuna y efectiva los eventos de contaminación por hidrocarburos, y los contenidos mínimos que debe tener dicho sistema.

Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que Provoquen Contaminación por Hidrocarburos

La Ley 23.456 aprueba el "Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que provoquen contaminación por hidrocarburos" y su Anexo, que fue firmado en Bruselas en 1969 y entró en vigor el 6 de mayo de 1975.

El Convenio de referencia establece en su Artículo I que las Partes podrán tomar en alta mar "las medidas necesarias para prevenir, mitigar o eliminar cualquier peligro grave e inminente contra su litoral o intereses afines, debido a contaminación o amenaza de contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, producto de un accidente marítimo u otros hechos relacionados con ese accidente, a los que razonablemente se atribuyen consecuencias desastrosas de gran magnitud".

Las medidas que tomen los Estados ribereños en virtud de este artículo deben ser "proporcionales al daño causado o al riesgo esperado", "no excederán de lo razonablemente necesario para lograr el objetivo antes mencionado" y "cesarán tan pronto como dicho objetivo se haya logrado" (Artículo 5).

Convenio para la Prevención de la Contaminación del Mar por Descarga de Residuos y Otras Materias

El "Convenio para la prevención de la contaminación del mar por descarga de residuos y otras materias" (Londres, 1972), ratificado en 1979 por la Ley 21.947, establece una serie de disposiciones que contribuyen al control internacional y la prevención de la contaminación del mar.

Así, en el Artículo 4 establece que las Partes deben prohibir "la descarga de cualquier residuo u otra materia en cualquier forma o condición, excepto en los casos que se especifican a continuación:

- a. Se prohíbe la descarga de residuos u otras materias enumeradas en el Anexo I;
- b. Se requiere un permiso previo especial para la descarga de residuos u otras materias enumeradas en el Anexo II;
- c. Se requiere un permiso general previo para la descarga de todos los demás residuos o materiales”.

El mencionado Convenio define en su Artículo 3 "descarga" como "toda evacuación deliberada en el mar de residuos u otras materias, realizada desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar" y "todo hundimiento deliberado en el mar de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar". Sin embargo, el concepto no incluye "la evacuación de residuos u otros materiales directamente derivados de la exploración, explotación y tratamientos relacionados en alta mar de los recursos minerales del fondo marino o relacionados con ellos".

Los Anexos I y II de la Convención enumeran los residuos que no pueden ser vertidos y aquellos para los que se requiere un permiso especial de vertido, respectivamente. En el Anexo III, por su parte, se determinan los criterios que rigen la emisión de permisos generales y especiales.

Dicho Convenio cuenta con un Protocolo suscrito en 1996, destinado a reemplazarlo y establecer una serie de disposiciones más restrictivas que las originales en cuanto a los residuos que pueden ser vertidos al mar. Este Protocolo no ha sido ratificado por la República Argentina a la fecha de este informe.

Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos del Buque (BWM) 2004

El "Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos del Buque, 2004" (BWM, por sus siglas en inglés), entró en vigencia internacional a partir del 8 de septiembre de 2017 y para la República Argentina a partir del 2 de noviembre de 2017, fue aprobado por Ley 27.011. La Prefectura Naval Argentina es su autoridad competente, según Decreto 1814/2015.

La Resolución A.868 (20) de la OMI, como anexo a la convención MARPOL, tiene como objetivo colaborar con los gobiernos, las autoridades competentes, los capitanes de los buques, las compañías navieras, los propietarios de buques, las autoridades portuarias y otros actores para minimizar el riesgo de introducción de organismos y patógenos acuáticos nocivos presentes en el agua de lastre y en sus sedimentos, sin poner en peligro la seguridad del buque, incluidos los procedimientos operativos para los mismos. Por tal motivo, la Prefectura Naval Argentina elaboró en nuestro país la Ordenanza 7/1998, DPMA - Tomo 6, "Régimen para la protección del medio ambiente", para prevenir la contaminación con organismos acuáticos en el lastre de los buques con destino a puertos argentinos de la Cuenca del Plata. Asimismo, la Prefectura creó debidamente la Ordenanza 12/1998, DPMA - Tomo 6 "Designación de Zonas de Protección Especial en la Costa Argentina".

La Ordenanza 7/1998 DPMA fue derogada y reemplazada por la Ordenanza 7/2017 (DPMA) del Tomo 6. Así, los Artículos 1, 2 y 4 de la Disposición 295-E/2017 indican:

Artículo 1. - Apruébase la Ordenanza N° 7-17 (DPAM) del Tomo 6 "RÉGIMEN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL" titulada "NORMAS PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES, ARTEFACTOS NAVALES U OTRAS CONSTRUCCIONES FLOTANTES".

Artículo 2. - La descarga de agua de lastre y los sedimentos de los buques, sólo se permitirá si se demuestra haber cumplido satisfactoriamente las normas de control y gestión del agua de lastre y los sedimentos, dispuestas en la presente Ordenanza y en el "Convenio BWM, 2004".

Artículo 4.- DERÓGASE la Ordenanza N.º 7-98 (DPMA) del Tomo 6 "RÉGIMEN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE" titulada "PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN CON ORGANISMOS ACUÁTICOS EN EL LASTRE DE LOS BUQUES DESTINADOS A PUERTOS ARGENTINOS DE LA CUENCA DEL PLATA".

Las embarcaciones vinculadas al Proyecto que pertenezcan a un país que haya ratificado el convenio deben cumplir con lo establecido en las normas D-1 y D-2 en cuanto a los volúmenes de renovación del agua de lastre, con la distancia a la costa para realizarlo y los límites de concentración de organismos *Vibrio cholerae*, *Escherichia coli* y enterococos intestinales. Cabe aclarar que dicho acuerdo aún no ha sido ratificado por la República Argentina.

Las embarcaciones que Equinor contratará para este proyecto presentarán un plan de gestión del agua de lastre. El agua de lastre en posesión del buque se eliminará de acuerdo con las ordenanzas de la PNA. Autoridad competente: PNA.

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar

La Ley 22.079 ratificó el "Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar". En materia de seguridad, la República Argentina ha suscrito el mencionado Acuerdo, que obliga a las partes a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la vida humana en las aguas.

La embarcación que será contratada por Equinor cuenta con un especialista en salud y seguridad como parte de su tripulación durante el tiempo que se encuentra en alta mar.

Acuerdo del Río de la Plata y su Frente Marítimo

Este tratado fue firmado con la República Oriental del Uruguay con el principal motivo de fijar los límites del Río de la Plata. Asimismo, establece una franja de jurisdicción exclusiva para cada país, que corre paralela a las respectivas costas y tiene un ancho de 2 millas náuticas en el tramo superior y 7 millas en el tramo medio del Río de la Plata. El espacio entre los límites exclusivos corresponde a "uso común".

En relación con el proyecto de perforación de pozos exploratorios, es importante comentar que, si bien el alcance geográfico no incluye la ubicación del pozo dentro de los límites de este acuerdo; establece una zona de prohibición de acciones contaminantes. Allí se prohíbe la descarga de hidrocarburos de lavado de tanques, desagüe y drenaje de lastre y, en general, cualquier otra acción que pueda tener efectos contaminantes (Artículo 78).

En particular, el Capítulo IX del Tratado se refiere a la Contaminación. Establece que cada parte será responsable ante la otra por los daños que se infieran como consecuencia de la contaminación causada por sus propias actividades o por las de las personas naturales o jurídicas domiciliadas en su territorio (Artículo 51). También indica que, la parte responsable debe indemnizar a la otra por los daños sufridos y que se espera la cooperación mutua (Artículo 52).

El Capítulo X, por su parte, comenta sobre la actividad pesquera, los derechos exclusivos de cada país y la necesidad de trabajo conjunto, cooperación e intercambio de información al respecto.

Dicho tratado, suscrito en 1973, es aprobado en Argentina al año siguiente por Ley 20.645. La Comisión Administrativa del Río de la Plata es responsable de su implementación.

3.4.2.3 Cambio climático y emisiones gaseosas

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono y Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono

La Ley 23.724 aprueba la "Convención de Viena para la protección de la capa de ozono", adoptada en Viena el 22 de marzo de 1985. En el marco de este Convenio, la Ley 23.778 aprobó el "Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono", firmado en Montreal el 16 de septiembre de 1987 que fuera posteriormente enmendada por las Leyes 24.167, 24.418 y 25.389 y sus modificaciones, adoptadas en Londres el 29 de junio de 1990, Copenhague el 25 de noviembre de 1992 y Montreal el 17 de septiembre de 1997, respectivamente.

El régimen normativo que establece esta Convención estipula una serie de limitaciones al uso y metas de reducción de emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono, así como otros instrumentos

destinados a su protección, que puedan tener interferencia en la etapa de operación del Proyecto debido a las posibles emisiones gaseosas de las embarcaciones.

No se prevén emisiones de sustancias incluidas en el régimen de la mencionada Convención en el marco del presente proyecto. Cabe señalar que las maquinarias y equipos de las embarcaciones que serán contratadas por Equinor, y que puedan incluir sistemas de refrigeración serán inspeccionados y recibirán el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para evitar emisiones de gases a la atmósfera de acuerdo con la normativa correspondiente. Este EsIA también incluye una estimación de las emisiones atmosféricas tanto para el buque de perforación, las embarcaciones de apoyo y las operaciones de helicópteros en el área de influencia.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

La Ley 24.295 aprueba la “Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático”, adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y abierta a la firma en Río de Janeiro el 4 de junio de 1992.

Su objetivo "es lograr la [...] estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite las peligrosas interferencias antropogénicas en el sistema climático. Este nivel debe alcanzarse en un periodo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, garantizar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico continúe de manera sostenible" (Artículo 2).

En el marco de esta Convención, la Ley 25.438, promulgada el 19 de julio de 2001, aprobó el Protocolo de Kioto, suscrito en Kioto el 11 de diciembre de 1997, que establece, entre otras cuestiones, una serie de compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Este EsIA ha estimado las emisiones del Proyecto con base en la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en el "Capítulo 3: Combustión móvil" de las "Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero".
Autoridad competente: MAYDS.

3.4.2.4 Biodiversidad

Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat para Aves Acuáticas

La Convención sobre los humedales, conocida como Convención de Ramsar (1971), es el tratado intergubernamental que proporciona el marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Entró en vigencia en Argentina en 1992 y fue aprobada mediante la Ley 23.919.

Actualmente, Argentina tiene 23 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional (o sitios Ramsar).

Convenio sobre la Diversidad Biológica

La Ley 24.375 aprueba el “Convenio sobre la diversidad biológica”, adoptado y abierto a la firma en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992.

Los objetivos de este Convenio son la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso adecuado a esos recursos y la transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como a través de una financiación adecuada (Artículo 1).

El Artículo 3 del Convenio establece como principio que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no dañen el medio ambiente de otros Estados o de áreas fuera de cualquier jurisdicción nacional.

Asimismo, en relación con esta ley, la Resolución MArDS 151/2017 aprobó la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad 2016-2020 para el país, que tiene como objetivo brindar un marco a las políticas, programas y planes de biodiversidad para que sean coordinados e integrados en el desarrollo humano sostenible. Su autoridad de ejecución es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Cabe señalar que, como parte del estudio ambiental de este proyecto, el EIA será revisado por la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres

La Ley 23.918 aprueba la “Convención sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres (CMS, por sus siglas en inglés)”, adoptada en Bonn el 23 de junio de 1979.

Esta Convención clasifica las especies migratorias en dos grupos, a saber:

- Especies migratorias amenazadas (Apéndice I); y,
- Especies migratorias cuyo estado de conservación es desfavorable y que requieren la celebración de acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y uso, así como aquellas cuyo estado de conservación se beneficiaría considerablemente de la cooperación internacional resultante de un acuerdo internacional (Apéndice II).

Para cada uno de los grupos de especies antes mencionados, se establecen medidas de protección específicas y/o, según corresponda, se encomienda a las Partes signatarias la adopción de medidas adicionales, a fin de evitar que una especie migratoria se convierta en una especie amenazada.

Esta mención se incluye teniendo en cuenta que puede existir la presencia de especies migratorias de animales silvestres en el área de influencia. Autoridad competente: MArDS.

Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas

El objetivo de la Convención es promover la protección y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats en las Américas. Todas las especies de tortugas marinas están amenazadas y están incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Esta mención se incluye tomando en cuenta que puede haber presencia de especies de tortugas marinas en el área de influencia. Autoridad competente: MArDS.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

La Ley 22.344 aprueba la “Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres” (CITES), suscrita en Washington el 3 de marzo de 1973, con sus Apéndices y Enmiendas a los Apéndices I, II y III, adoptada en Berna entre el 2 y 6 de noviembre de 1976 y San José, Costa Rica entre el 19 y 30 de marzo de 1979.

Mediante esta Convención, se establece que “las Partes no permitirán el comercio de especímenes de especies incluidas en los Apéndices I, II y III, excepto de conformidad con las disposiciones de esta Convención” (Artículo 2, inciso 4).

El Decreto 522/1997 regula la Ley 22.344 que regula la importación, exportación, reexportación o introducción desde el mar de especímenes incluidos en la Convención y su autorización mediante la extensión de un Permiso CITES de Importación o Exportación o un Certificado Preconvención, reexportación o introducción desde el mar. Establece que la autoridad competente es la actual Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo (Conf. Artículo 2).

Si bien está asociada al comercio de flora y fauna, esta Convención, con la estructuración de las especies en varios anexos, es útil a la hora de definir y evaluar el grado de sensibilidad que presenta una determinada especie (en particular, aquellas que tienen su hábitat en el área de influencia del Proyecto).

Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles

La Ley 26.107 ratificó el “Acuerdo para la conservación de albatros y petreles”, firmado en Canberra el 19 de junio de 2001.

El objetivo de este acuerdo es lograr y mantener un estado de conservación favorable para los albatros y petreles, encomendando a los Estados Parte, tomar una serie de medidas para lograr este objetivo. Para ello, el Artículo III de esta Convención establece una serie de medidas generales de conservación que serán implementadas por los Estados Parte.

Se incluye esta mención considerando que puede haber presencia de este tipo de ave en el área de influencia. Autoridad competente: MAYDS.

3.4.2.5 Patrimonio

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

La Ley 21.836 aprueba la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en París el 16 de noviembre de 1972.

En virtud de la misma, “cada uno de los Estados Parte de esta Convención reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural ubicado en su territorio, le incumbe primordialmente” [...] (Artículo 4).

Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático

La Ley 26.556 aprobó en 2009 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático adoptada por la Trigésima Primera Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO.

La Ley 26.556 tiene como objetivo garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural subacuático. En el área de operación del Proyecto, no se ha identificado ningún vestigio de patrimonio cultural subacuático.

3.4.2.6 Productos químicos y residuos

Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos

El Convenio de Basilea, ratificado a nivel nacional por la Ley 23.922, establece que los Estados Parte del Convenio no permitirán la exportación de residuos peligrosos y otros residuos a un Estado no Parte o la importación de dichos residuos de un Estado no Parte (Artículo 4, párrafo 5).

Además, las Partes tomarán las medidas necesarias para que el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y otros residuos solo se permita si:

- El Estado de exportación no tiene la capacidad técnica o las instalaciones requeridas o sitios de disposición adecuados para eliminar los residuos en cuestión de una manera ambientalmente racional y eficiente; o
- Los residuos en cuestión se necesitan como materias primas para las industrias de reciclaje o recuperación en el Estado de importación; o
- El movimiento transfronterizo en cuestión se ajusta a otros criterios que puedan decidir las Partes, siempre que dichos criterios no contradigan los objetivos de la presente Convención.

Los residuos peligrosos generados durante el tiempo en el mar se colocarán en contenedores adecuados para ser transportados a tierra. Luego, una vez en tierra, serán tratados por empresas calificadas para esta actividad. Las embarcaciones que serán contratadas por Equinor presentan un plan de gestión de residuos peligrosos. La autoridad competente es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Convenios sobre la Reglamentación de Productos Químicos y Sustancias Químicas

Cabe señalar que, Argentina también forma parte del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam sobre el consentimiento fundamentado previo para ciertos productos químicos peligrosos sujetos a control, el Convenio de Minamata sobre el mercurio y también participa como parte del Enfoque Estratégico de las Naciones Unidas para la Gestión de Productos Químicos.

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la nación, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, son autoridades de aplicación y puntos focales de los convenios.

Sin embargo, dadas las particularidades del proyecto, no existen productos o sustancias sujetos a los convenios, por lo que no son directamente aplicables.

3.4.2.7 Información y participación pública

Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe

La Ley 27.566 aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el “Acuerdo de Escazú”) por parte de la República Argentina. El mismo fue ratificado el 22 de enero del 2021 y entró en vigencia el 22 de abril de 2021.

El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, y tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en materia ambiental, así como la creación y fortalecimiento de capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, para vivir en un medio ambiente sano y para el desarrollo sostenible. No contiene

reglas, sino directrices que deben ser implementadas por los Estados Parte en la medida de sus posibilidades.

En términos generales, el Acuerdo de Escazú busca que los Estados Parte garanticen: (i) el derecho de participación del público en la toma de decisiones; (ii) el derecho a recibir la información necesaria para posibilitar dicha participación y que dicha información sea clara, oportuna y comprensible; y que (iii) el procedimiento de participación pública se lleve a cabo en plazos razonables.

Particularmente, en el caso del proyecto de Equinor, este acuerdo es relevante en cuanto a los procesos de participación pública temprana que se llevan a cabo. En particular, se puede mencionar el proceso de participación temprana de los grupos de interés, la comunicación con otros proponentes, la participación temprana en el procedimiento del ESlA técnico-administrativo y la realización del proceso de audiencia pública requerido por la Resolución Conjunta 3/2019.

3.4.3 Normas de presupuestos mínimos de protección ambiental

El Artículo 41 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, establece que *"corresponde a la Nación dictar las normas que contienen los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementirlas, sin que las primeras alteren las jurisdicciones locales"*.

Estas normas tienen como objetivo, establecer presupuestos mínimos de protección del ambiente para todo el territorio nacional. Las leyes de presupuestos mínimos son de aplicación en todo el territorio nacional y, por tanto, al Proyecto en estudio.

A continuación, se incluye un breve resumen de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental promulgadas a partir de la reforma constitucional de 1994.

3.4.3.1 Ley 25.675 - Ley General del Ambiente

Esta ley establece los presupuestos mínimos para el logro de un manejo sustentable y adecuado del medio ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.

En particular, reconoce los principios a los que estará sujeto el cumplimiento de la interpretación y aplicación de esta ley y de cualquier otro reglamento, mediante el cual se ejecute la política ambiental (Artículo 4).

Los instrumentos de política y gestión ambiental, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8, serán:

1. La planificación ambiental del territorio.
2. El estudio de impacto ambiental.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.
4. Educación ambiental.
5. El sistema de información y diagnóstico ambiental.
6. El régimen económico para la promoción del desarrollo sostenible.

En cuanto al Estudio de Impacto Ambiental, la Ley General del Ambiente establece, entre otras medidas, que:

1. *"Toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución" (Artículo 11).*
2. *"Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos" (Artículo 13).*

Cabe señalar que el procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental (EslA) a nivel nacional se encuentra regulado por las disposiciones generales contenidas en la presente Ley General del Ambiente. Adicionalmente, en lo que específicamente hace al presente proyecto de perforación de pozos costa afuera en el bloque CAN_100, se aplican asimismo, en cuanto al contenido del EslA, la Resolución SE 25/2004 relativa a las Normas para la presentación de Estudios Ambientales correspondientes a los Permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos, y en cuanto al procedimiento, la Resolución Conjunta 3/2019 de la Ex SGE y la Ex SGAYDS.

También se han aplicado las disposiciones de la Resolución 337/2019, que aprueba la "Guía para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental" desarrollada por la anterior SGAYDS. Si bien esta guía es de carácter general y es aplicable a cualquier trabajo y proyecto, se utiliza como referencia de buenas prácticas en cuanto al marco conceptual, contenido y estructura del EslA.

En cuanto a la Información Ambiental, establece que:

- *"Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referidas a las actividades que desarrollen"* (Artículo 16).
- *"Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre legalmente como reservada"* (Artículo 16).
- *"Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas"* (Artículo 18).

Respecto a la Audiencia Pública, determina que:

- *"Toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general"* (Artículo 19).
- *"Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente"* (Artículo 20).
- *"La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en el caso de que estas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, deberán fundamentarla y hacerla pública"* (Artículo 20).
- *"La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de estudio de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados"* (Artículo 21).

En cuanto al Seguro Ambiental, se determina que *"Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir. Asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la implementación de acciones de reparación"* (Artículo 22).

Finalmente, el Daño Ambiental se define en el Artículo 27 de la Ley General del Ambiente como *"toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos"*.

Quien cause daño ambiental será objetivamente responsable de su restitución al estado anterior a su producción (Artículo 28).

En caso de que esto no sea técnicamente factible, la compensación sustitutiva que determine la justicia ordinaria debe depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la ley en comentario, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieran corresponder (Artículo 28).

Solo existirá exención de responsabilidad si se acredita que, a pesar de haber adoptado todas las medidas encaminadas a evitarlo y sin la concurrencia del responsable, los daños fueron causados por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Adicionalmente, conviene considerar que la responsabilidad civil o penal por daño ambiental es independiente de la administrativa (Artículo 29).

También se determina que, una vez producido el daño ambiental colectivo, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental tendrán legitimidad para obtener la recomposición del ambiente dañado, conforme a lo dispuesto en el Artículo 43 de la Constitución Nacional, y el estado nacional, provincial o municipal (Artículo 30).

La persona directamente perjudicada por el hecho lesivo acaecido en su jurisdicción también tendrá derecho a la correspondiente acción de recomposición o indemnización (Artículo 30).

Finalmente, cualquier persona puede solicitar, mediante una acción de protección, el cese de actividades que generen daño ambiental colectivo (Artículo 30).

Resolución SAYDS 177/2007 y sus modificaciones, Resolución SAYDS 303/2007 y Resolución SAYDS 1639/2007 - Seguro Ambiental

La Resolución 177/2007 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, modificada por Resolución 303/2007 del mismo organismo, nuevamente modificada por Resolución SAYDS 1639/2007, aprueba las normas operativas para la contratación de seguros previstos en el Artículo 22 de la Ley 25.675.

Para tal efecto, establece que las actividades enumeradas en el Anexo I (modificado por Resoluciones SAYDS 303/2007 y 1639/2007) son consideradas actividades de riesgo para el medio ambiente que verifican los Niveles de Complejidad Ambiental identificados como Categorías 2 (complejidad media) o 3 (complejidad alta) del Anexo II. Dichos Niveles de Complejidad Ambiental se determinarán mediante la ecuación polinómica incluida en el Anexo II antes mencionado.

No obstante, en relación con este Proyecto, la Resolución SAYDS 177/2007 y sus modificaciones (Resoluciones SAYDS 303/2007 y 1639/2007) eximen de la contratación de un seguro ambiental a los proyectos de prospección relacionados con la Industria de Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural como el presente.

3.4.3.2 Ley 25.612 - Gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios

Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en la gestión integral de residuos de origen industrial y actividades de servicios, que se generan en todo el territorio nacional, y se derivan de procesos industriales o actividades de servicios.

El Artículo 2 de esta ley define como residuo industrial a *“cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo”*.

Quedan excluidos del reglamento de esta ley los siguientes residuos, según lo establecido en el Artículo 5:

- Residuos biopatógenos
- Residuos domésticos
- Residuos radiactivos
- Residuos derivados de las operaciones manuales normales de buques y aeronaves

Por su parte, el Artículo 10 establece que la responsabilidad del adecuado tratamiento y disposición final de los residuos industriales recae en el generador. En consecuencia, el Artículo 16 establece que todo generador de residuos industriales, como propietario de los mismos, es responsable de todos los daños que ocasione, en los términos de esta ley.

Por otro lado, el Artículo 11 establece que los generadores de residuos industriales deben implementar las medidas necesarias para:

- a. "Minimizar la generación de residuos que producen, pudiendo para ello, adoptar programas progresivos de adecuación tecnológica de los procesos industriales, que prioricen la disminución, el reúso, el reciclado o la valorización, conforme lo establezca la reglamentación.
- b. Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí, evitando el contacto de los mismos en todas las etapas de la gestión, definida en el artículo 2.
- c. Envases de residuos industriales, cuando las medidas de seguridad y salud ambiental así lo requieran, identificar los envases y su contenido, fecharlos y no mezclarlos, según establece la normativa.
- d. Tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los residuos industriales generados por su propia actividad in situ con el fin de lograr la reducción o eliminación de sus características de peligrosidad, nocividad o toxicidad; de no ser posible, deberá hacerlo en plantas de tratamiento o disposición final que presten servicios a terceros debidamente habilitadas, todo ello, conforme lo establezca la reglamentación y las leyes complementarias de la presente. El transporte será realizado por transportistas autorizados, de conformidad con el Artículo 23.
- e. Reusar sus residuos, como materia prima o insumo de otros procesos productivos, o reciclar los mismos."

En materia de responsabilidad penal, se encuentra vigente el régimen establecido por la Ley 24.051 (Capítulo IX, Artículos 55 a 58). La Ley 25.612 se encuentra en pleno funcionamiento con respecto a varias de sus disposiciones y coexiste con el régimen de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

Al momento de elaborar este informe, la Ley 25.612 no se encuentra plenamente regulada.

Cabe mencionar que, las embarcaciones que serían contratadas por Equinor, contarán con un programa de manejo de residuos, en el cual los residuos son segregados por categorías (peligrosos y no peligrosos) y luego dispuestos en consecuencia, mediante empresas autorizadas. La autoridad competente es el Ministerio de Medio Ambiente.

3.4.3.3 Ley 25.831 - Régimen de libre acceso a la información pública ambiental

Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que está en poder del Estado, tanto a nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como a las entidades autárquicas y empresas que brindan servicios públicos, ya sean públicos, privados o mixtos (Artículo 1).

Para efectos de este régimen, se entiende por información ambiental *"toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable"* (Artículo 2).

Los sujetos obligados a proporcionar la información ambiental requerida son las autoridades competentes de los organismos públicos y los titulares de las empresas que prestan servicios públicos, sean públicos, privados o mixtos (Artículo 4). Esta norma no ha sido regulada a la fecha de este informe. Sin embargo, toda la información contenida en el EsIA sobre el Proyecto estará a disposición de la Autoridad Competente (MAyDS) y del público en general.

3.4.3.4 Ley 27.275 – Ley de derechos de acceso a la información pública

Esta ley tiene como objetivo garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. En el contexto de este Proyecto, se relaciona con todas las instancias de participación (proceso de participación de los grupos de interés) y en particular con la audiencia pública. De acuerdo con esta Ley, el EsIA del proyecto de perforación será considerado como “información pública”, ya que será entregado al Ministerio del Ambiente. Por ello, se tratará con unas condiciones especiales. Por ejemplo, todos los ciudadanos podrán solicitarlo y consultarlo sin ningún costo. Además, esta ley prevé un mecanismo de reclamación en caso de que se niegue este derecho.

La Agencia de Acceso a la Información Pública está a cargo de esta ley y todos los organismos del Poder Ejecutivo deben cumplirla.

Toda la información correspondiente al Proyecto en el marco de la elaboración de este EsIA y la documentación complementaria que se comparta en el marco de todas las instancias de participación pública se considera sujeta al régimen de libre acceso a la información pública ambiental. Autoridad competente: MAYDS.

3.4.3.5 Decreto 1.172/2003 – Participación pública, audiencia pública y acceso a la información

El Decreto 1.172/2003 aprueba el “Reglamento General de Audiencias públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”. Al respecto, se aclara que el decreto es especialmente aplicable al Proyecto en virtud de lo dispuesto en el Artículo 6 del Anexo I de la Resolución Conjunta 3/2019: *“PARTICIPACIÓN PÚBLICA. Se deberán implementar instancias participativas, a través de procedimientos de consulta o audiencia pública, de acuerdo a los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad, cuyo costo estará a cargo del proponente. Para los casos de realización de una audiencia pública, ésta se deberá instrumentar de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 1172/2003, su modificatorio N° 79/2017 y normativa complementaria.”*

En virtud del tipo de actividad a realizar y lo dispuesto en el Informe de Categorización se deberá convocar a una audiencia pública como parte del proceso de evaluación ambiental. La sección 4 del Informe de Categorización establece: *“Conforme de lo dispuesto en el Artículo 6 del Anexo I de la Resolución Conjunta SE-SAYDS N° 3/2019, se deberán implementar instancias participativas en relación al proyecto bajo estudio. Considerando la tipología de proyecto corresponde la realización de una audiencia pública.”*

De esta manera, el Decreto 1.172/2003 regula el procedimiento para llevar a cabo la audiencia pública estableciendo la forma de convocatoria, su publicación en el Boletín Oficial, la creación de un registro de participantes, quién debe ser la autoridad encargada de llevar adelante la audiencia, los plazos y las etapas (preparatorias, el desarrollo de la audiencia y la etapa final). La Audiencia Pública es considerada como un espacio y oportunidad que la autoridad de aplicación brinda a los ciudadanos para expresar sus principales preocupaciones y opiniones en relación con un proyecto específico por el que podrían verse potencialmente afectados.

Con respecto a la participación pública en el proceso de evaluación, cabe destacar que lo dispuesto en el Decreto 1.172/2003 y todo el procedimiento que establece la Resolución Conjunta 3/2019 es compatible con el Artículo 7 del Acuerdo de Escazú (conforme se define más adelante) relativa a la participación pública en el proceso de toma de decisiones ambientales.

La autoridad de aplicación elegida para llevar adelante la audiencia pública deberá determinar el lugar y la modalidad bajo la cual se llevará a cabo (es probable que en este caso sea el MAYDS).

3.4.3.6 Ley 27.520 – Presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global

Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación al cambio climático en Argentina en los términos del Artículo 41 de la Constitución Nacional. Su Decreto Reglamentario es el Decreto 1.030/2020. La autoridad de fiscalización de la misma es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para los fines de este Proyecto, por estar ubicado en territorio nacional. A nivel local, para las áreas portuarias involucradas en el Proyecto, la autoridad competente de esta ley será el organismo que las provincias (en este caso, la Provincia de Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Esta Ley establece un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que debe ser implementado por el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Si bien Equinor no será responsable de su implementación o coordinación, se entiende que forma parte del marco de políticas públicas en el que se inserta.

En particular, el Artículo 26 dice "Información medioambiental". Todos los datos y documentación relacionados con su aplicación se consideran información ambiental pública y se crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático. Cada jurisdicción debe promover procesos participativos entre todos los involucrados e interesados que conduzcan a la definición de las mejores acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. El proceso de participación de los grupos de interés para este Proyecto se encuentra en marcha y ya se ha realizado una instancia de participación temprana. En estas líneas, es importante mencionar que, para la elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental, Equinor estimó el volumen de combustión y gases de efecto invernadero que se estima generará durante el proyecto de perforación. Tanto su metodología de cálculo como los datos implementados se presentan con mayor profundidad en el Capítulo de Descripción del Proyecto y, por formar parte de este documento, se consideran información ambiental pública que estará a disposición de la jurisdicción nacional.

3.4.3.7 Ley 25.670 – Presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs

Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los bifenilos policlorados (PCBs), en todo el territorio de la Nación en los términos del Artículo 41 de la Constitución Nacional. El Decreto 853/2007, que regula la Ley 25.670, establece en su Capítulo III, que la autoridad competente es el máximo órgano jerárquico de la Nación con competencia ambiental, en este caso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Este reglamento podría aplicarse al Proyecto si se manejaran productos incluidos en el Artículo 3 de la mencionada ley y sujetos a su régimen. Sin embargo, en el Proyecto no se utilizarán equipos o materiales que contengan PCBs por lo que sus disposiciones no le serán directamente aplicables.

3.4.4 Gestión ambiental en actividades de petróleo y gas

3.4.4.1 Resolución Conjunta 3/2019 entre la Ex Secretaría de Gobierno de Energía y la Ex Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

El proceso de permisos ambientales para las actividades de sísmica y perforación en alta mar está regulado por la Resolución Conjunta 3/2019 aprobada por la Ex SGA y la Ex SAYDS de la Nación, actualmente denominada Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El reglamento aprueba el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para proyectos o actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, incluido el abandono de pozos e instalaciones, que se realizará con permisos de reconocimiento de superficie, permisos de exploración o concesiones de explotación de hidrocarburos, en áreas ubicadas entre las doce (12) millas náuticas (medidas a partir de las líneas de base establecidas por la Ley 23.968 y las modificaciones introducidas mediante la Ley 27.557) y el límite exterior de la plataforma continental, que pueden degradar

significativamente el medio ambiente o afectar a la población. En este caso, la perforación de pozo exploratorio de Argerich-1 sigue, en términos de procedimiento, esta Resolución, que lidera el proceso técnico-administrativo y determina los pasos para obtener la licencia ambiental del Proyecto.

Con respecto al contenido que debe tener el EsIA para los proyectos de perforación se debe estar a lo dispuesto en la Resolución SE 25/2004. En efecto, el segunda párrafo del Artículo 2 de la Resolución Conjunta 3/2019 dice *“La estructura y contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de perforación de pozos exploratorios y explotación hidrocarburífera, incluyendo perforación y abandono de pozos y desafectación de instalaciones se regirá por lo dispuesto por el Apartado 3 “Estructura del Estudio Ambiental” del Anexo de la Resolución N° 25 del 12 de enero de 2004 de la ex SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.”*

Los titulares de un permiso de reconocimiento de superficie, un permiso de exploración y/o una concesión de explotación; proponentes de un proyecto en los términos del Anexo II de la Resolución Conjunta 3/2019, deberán cumplir, previo a su ejecución, un proceso de evaluación de impacto ambiental y obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La norma establece un procedimiento ordinario y un procedimiento simplificado dependiendo de la complejidad del proyecto o actividades y de las características del entorno donde se desarrollará el proyecto/actividad. Tal distinción se encuentra plasmada en el Anexo II de la resolución de referencia. Mientras que los proyectos incluidos en el Anexo II-A están sujetos al "proceso ordinario", los proyectos enumerados en el Anexo II-B están sujetos al "proceso simplificado". La perforación del pozo exploratorio está contemplada en el Anexo II-A y por lo tanto le corresponde un procedimiento ordinario.

Como se aclara en esta normativa, la estructura y contenido de los informes de estudio de impacto ambiental para la perforación de pozos de exploración y pozos de producción, incluyendo la perforación y abandono de pozos e instalaciones, deben seguir la estructura e incluir los contenidos establecidos en el Artículo 3 “Estructura del Informe Ambiental” del Anexo de la Resolución 25/2004 de la anterior Secretaría de Energía.

La elaboración de los estudios de impacto ambiental debería seguir las directrices establecidas en la “Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental” desarrollada por la anterior Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y aprobada por Resolución SAyDS 337/2019 pero considerando la estructura y contenidos, como se ha mencionado anteriormente.

3.4.4.2 Otras normativas ambientales clave

Las normativas ambientales clave que se aplican a las actividades de petróleo y gas en alta mar son:

Resolución SE 25/2004 – Normas para la presentación de los Estudios Ambientales correspondientes a los permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos

La Resolución 25/2004 aprueba los requisitos para la presentación de estudios ambientales requeridos para solicitar permisos de exploración de petróleo y gas y concesiones de explotación.

Además, y como se mencionó anteriormente, estudios como este EsIA para pozos de exploración y pozos de explotación en alta mar, incluyendo la perforación y abandono de pozos e instalaciones, también deben seguir la estructura e incluir los contenidos establecidos en este reglamento. Todas las empresas que posean permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos (otorgadas de acuerdo con la Ley 17.319) deben cumplir con estas normativas. El anexo de la normativa establece la estructura que debe tener el estudio de impacto ambiental y los contenidos mínimos que deben incluirse en el mismo. De acuerdo con la Resolución Conjunta 3/2019, esta Resolución 25/2004 determina los contenidos mínimos para el EsIA de un proyecto de perforación,

antes de que se entregue el informe de categorización. Este es el caso del Proyecto de perforación Argerich-1.

Resolución SE 24/2004 – Normas para la Presentación de Informes de Incidentes Ambientales

La Resolución 24/2004 regula la notificación de incidentes ambientales que ocurren en el marco de las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas.

A través de la Resolución 24/2004, la Secretaría de Energía de la Nación fijó dos categorías de incidentes, Incidentes Mayores e Incidentes Menores, disponiendo respecto de los primeros la obligación de informarlos dentro de las veinticuatro horas de sucedidos. Para dichos casos de Incidentes Mayores, la resolución mencionada obliga a la compañía responsable a presentar a la Subsecretaría de Combustibles un informe final del incidente, dentro de los treinta días de finalizadas las tareas de control del mismo. Con relación a los Incidentes Menores o de impacto mínimo, los mismos deben ser documentados y registrados por la compañía operadora.

En caso de que ocurra un incidente durante el desarrollo del Proyecto Argerich-1, el informe debe seguir esta resolución. Además, se tendrá en cuenta para la estrategia de Respuesta a Emergencias.

Resolución SE 342/1993 – Estructura de los Planes de Contingencia

La Resolución 342/1993 y su modificatoria Resolución 24/2004, definen la estructura que deben revestir los planes de contingencias que deben implementarse durante la exploración y/o explotación de hidrocarburos para el combate de incidentes. En relación con éstos, y bajo la Resolución 342/1993, las empresas petroleras estaban obligadas a informar cualquier incidente que pudiera afectar los recursos naturales, dentro de las veinticuatro horas de acaecidos los mismos.

Los planes de contingencia deben evaluar los daños potenciales y detallar las medidas preventivas y la organización de respuesta planificada, así como los medios de control de contingencias. Los Artículos 2 y 3 de la Resolución 342/1993 son derogados por la Resolución 24/2004.

En cuanto al contenido del plan de contingencia, debe estar compuesto por:

1. Implementación (acordada con las autoridades competentes),
2. Introducción (objetivos y alcance),
3. Plan de llamada de emergencia (prioridad de secuencia, con responsable de ejecución),
4. Funciones del grupo de respuesta,
5. Funciones del grupo asesor,
6. Medios y equipos (medios de contención, medios de confinamiento, medios de recolección, medios de limpieza y restauración, registro de contratistas, empresas especializadas de control de pozos),
7. Plan de recursos externos (medios y equipos de terceros disponibles para contratar, servicios asistenciales, recursos de especial sensibilidad, medio natural, ambiente institucional),
8. Plan de evacuación,
9. Plan de comunicaciones externas,
10. Plan de contingencia específico (derrames de agua de producción, derrames de hidrocarburos, incendios, emisiones atmosféricas, pozos no controlados),
11. Hidrocarburos presentes,
12. Plan de capacitación,
13. Elementos de consulta (Estudio ambiental, manuales y/o publicaciones, planes, legislación),
14. Actualización y modificación del plan,

Marco legal y de referencia. Finalmente, establece que los Planes de Contingencias deben entrar en vigencia en una fecha determinada y ser acordados con las autoridades competentes. Esta resolución aplica para el Proyecto Argerich-1, especialmente, para el desarrollo del Plan de Contingencia que será incluido en el Plan de Gestión Ambiental, siguiendo directrices nacionales.

3.4.5 Gestión ambiental para actividades marítimas

Las normas que se describen a continuación son aplicables en la medida en que se refieran a buques y dispositivos navales, que incluyen plataformas petrolíferas y embarcaciones de apoyo.

3.4.5.1 Ley 18.398 - Ley Orgánica de la Prefectura Naval Argentina

La Ley Orgánica de la Prefectura Naval Argentina (PNA) establece que ejerce el servicio de policía de seguridad de la navegación, el servicio de policía de seguridad y judicial y, en parte, la jurisdicción administrativa de navegación (Artículo 1). La autoridad competente es la PNA y se aplica al Proyecto en relación con la seguridad de la navegación y la aprobación del plan de contingencia.

De acuerdo con el Artículo 5 de esta ley, en el ejercicio de sus funciones como policía de seguridad de la navegación, la Prefectura Naval Argentina entiende, entre otras cuestiones, “respecto a las normas que se adopten para prohibir la contaminación de ríos, lagos y aguas marítimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas y verificar el cumplimiento”.

Todas las funciones de la Prefectura Naval Argentina establecidas en su Ley Orgánica se ejercen en las aguas dentro de la zona económica exclusiva, con carácter excluyente y exclusivo, ya que constituyen aguas navegables que sirven al tránsito y comercio interjurisdiccional. Por lo tanto, dado que el área de influencia del Proyecto se ubica dentro de la zona económica exclusiva (ZEE), se encuentra sujeta al régimen de esta ley y al poder de la Prefectura Naval Argentina como Autoridad de Fiscalización en la materia, particularmente como policía de seguridad en la navegación. Autoridad competente: PNA.

3.4.5.2 Ley 22.190 - Prevención y vigilancia de la contaminación de las aguas u otros elementos del medio ambiente por agentes contaminantes provenientes de los buques y artefactos navales

La Ley 22.190 aprueba el “Régimen de prevención y vigilancia de la contaminación de las aguas u otros elementos del medio ambiente por agentes contaminantes provenientes de los buques y artefactos navales” (Artículo 1). La autoridad competente es la Prefectura Naval Argentina.

Esta norma *“prohíbe a los buques y artefactos navales descargar hidrocarburos y sus mezclas fuera del régimen autorizado reglamentariamente y, en general, incurrir en cualquier acción u omisión no contemplada reglamentariamente, susceptible de contaminar las aguas de jurisdicción nacional. La prohibición se extiende a los buques de bandera nacional en alta mar”* (Artículo 2).

Según la norma, los buques y artefactos navales deben cumplir con las siguientes obligaciones que aplican a las operaciones de Equinor, de acuerdo con los requisitos establecidos por reglamento:

- *“Conservar el Libro de Registro de Hidrocarburos y otros registros que se determinen reglamentariamente;*
- *Informar sus propias descargas y buques de terceros y artefactos navales, así como las manchas que encuentren;*
- *Contar con equipos y sistemas de uso, medios y dispositivos para la prevención y lucha contra la contaminación;*
- *Observar las reglas de diseño relevantes; y*
- *Observar las reglas operativas para la prevención y lucha contra la contaminación”* (Artículo 4).

El Artículo 5 establece que la Administración General de Puertos será la encargada de limpiar las aguas de los puertos bajo su jurisdicción, ejecutando las obras y servicios encaminados a reducir los riesgos de contaminación.

Por su parte, la Prefectura Naval Argentina es la encargada de ejecutar las medidas para combatir a la contaminación y limpiar las aguas de jurisdicción nacional (Artículo 6).

Todos los residuos peligrosos serán almacenados en los buques del proyecto y eliminados a su llegada al puerto por una empresa especializada debidamente autorizada. El agua de sentina se eliminará según se especifica en la Regla 9 (Control de las descargas de hidrocarburos) del Anexo I de la Ley 24.089/1992. Autoridad competente: PNA.

3.4.5.3 Ley 21.353 - Aprueba convenio internacional para prevenir la contaminación del mar por hidrocarburos OILPOL 54

La Ley 21.353 aprueba el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar por Hidrocarburos OILPOL 54. Este convenio se aplicará a los buques registrados en cualquier territorio de un gobierno contratante y a los buques no registrados que posean la nacionalidad de una parte contratante. Todo buque petrolero al que se aplique el presente Convenio tendrá prohibido descargar hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos dentro de los límites de cualquiera de las zonas prohibidas previstas en el Anexo A del Convenio. Todo buque al que se aplique el presente Convenio, que no sea un petrolero, descargará hidrocarburos y mezclas de hidrocarburos lo más lejos posible de tierra.

Esta prohibición no podrá aplicarse si: a) La descarga de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos por un buque para garantizar su propia seguridad o la seguridad de otro buque, para evitar daños al buque o la carga, o para salvar vidas en el mar (b) La descarga de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos después de un daño o pérdida que es imposible prevenir, si se han tomado todas las precauciones razonables, después de que ocurrió el daño o el descubrimiento de la pérdida, para prevenir o reducir dicho escape c) A la descarga de residuos desde la purificación o clarificación de combustóleo o aceites lubricantes, siempre que la descarga se haga lo más lejos posible de tierra.

Todos los buques petroleros y todos los buques que utilicen hidrocarburos como combustible llevarán, en la forma establecida en el Anexo B del Convenio, un libro registro de hidrocarburos que podrá integrarse o no en la bitácora oficial. Este Convenio podrá ser denunciado por cualquier Gobierno Contratante en cualquier momento después del vencimiento luego de cinco años a partir de la fecha en que el Convenio entró en vigor para ese Gobierno.

3.4.5.4 Decreto 770/2019 - Régimen de navegación marítima, fluvial y lacustre (REGINAVE)

El Decreto 770/2019 aprueba el "Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre ("REGINAVE")", adjunto como anexo al decreto, que establece una serie de disposiciones reglamentarias sobre la navegación destinadas a brindar la seguridad de las personas y los buques mercantes. La autoridad competente es la PNA y se aplica al Proyecto en relación con todas las medidas que se aplicarán para prevenir la contaminación (es decir, en cuanto a efluentes, residuos, etc.).

Mediante el Artículo 2 del Decreto 1886/83, se incorpora al REGINAVE el Título 8 "Sobre la Prevención de la Contaminación por Buques", designando la Prefectura Naval Argentina para proceder a la emisión de los reglamentos complementarios que sean necesarios.

El citado Título 8 recibe las disposiciones del Convenio MARPOL 73/78 (ver Sección Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales y Regionales) sobre la prevención de la contaminación del agua por hidrocarburos y por aguas sucias en sus Capítulos 1 y 2, respectivamente.

3.4.5.5 Contaminación por hidrocarburos

La Sección 2 del Capítulo 1, del Título 8 del REGINAVE prohíbe cualquier descarga al mar de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos, a menos que se cumplan las condiciones detalladas en el Artículo 801.0201. Estas condiciones para los buques no petroleros de 400 TAT o más incluyen:

- Que el buque navegue en ruta.
- Que el contenido de hidrocarburos de la descarga sea menor a 100 (cien) partes por millón (ppm).
- Que la descarga se realice lo más lejos posible de la costa y en ningún caso a menos de 12 (doce) millas náuticas de la misma.
- Que cuente con un dispositivo de monitoreo y control de descargas de hidrocarburos (oleómetro), equipos de separación de agua e hidrocarburos o sistema de filtración de hidrocarburos, o cualquier otra instalación estipulada en el Artículo 801.0301. subsecciones g. Ee i.

Además, las descargas no deben contener productos químicos o cualquier otra sustancia en cantidades o concentraciones que puedan crear peligros para el medio marino, ni adición de productos químicos u otras sustancias cuyo propósito sea eludir el cumplimiento de las condiciones de descarga especificadas anteriormente (inciso e del Artículo 801.0201).

Por otro lado, se prohíbe la descarga de hidrocarburos y mezclas cuyo contenido exceda las 15 (quince) partes por millón (ppm) en aguas fluviales, lacustres y portuarias interiores (Artículo 801.0202.).

En todos los casos en que se produzcan descargas de hidrocarburos fuera del régimen autorizado, la embarcación responsable deberá utilizar todos los sistemas y medios a su alcance para combatir la contaminación producida (Artículo 801.0501). De acuerdo con el Artículo 801.0503, los sistemas y medios mecánicos para combatir la contaminación, cuyo uso debe ser autorizado por la Prefectura, deben reunir las siguientes condiciones:

- Las especificaciones mínimas estipuladas por la Prefectura y ser aprobadas por esta.
- No causar riesgos para la salud humana; no dañar la flora, fauna y recursos vivos del mar; no socavar los incentivos recreativos; y no distorsionar los usos legítimos del agua.

Adicionalmente, cabe señalar que en el Artículo 807.0107. del Capítulo 7 de REGINAVE, se prohíbe la descarga – en aguas nacionales – de hidrocarburos y sus mezclas cuyo contenido exceda de quince (15) ppm y de otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas en cualquier proporción; salvo las condiciones mencionadas en el Capítulo 6 del Título 8 de REGINAVE, en aguas nacionales (Art. 2, 3, 4 y 5 de la Ley 23.968)

Finalmente, esta norma establece que *“toda embarcación que requiera contar con dispositivos para prevenir la contaminación por hidrocarburos, según lo regulado en la Sección 3 de este Capítulo, o que deba cumplir con las reglas de diseño y dispositivos que se estipulan en la Sección 4 del Capítulo mencionado”*, estará sujeta a las inspecciones de la Prefectura (Artículo 801.0104.). Los buques petroleros de 150 TAT o más, o los no petroleros de 400 TAT o más, que hayan sido inspeccionados con resultados satisfactorios, recibirán un Certificado (Artículo 801.0105).

Las embarcaciones que serán contratadas por Equinor presentarán un sistema de separación petróleo-agua, el cual cumplirá con la normativa requerida. Autoridad competente: PNA.

3.4.5.6 Contaminación por aguas sucias

La Sección 2, Capítulo 2 del Título 8 del REGINAVE establece la prohibición de descargar aguas sucias al mar, salvo que:

1. El buque descarga a una distancia superior a 4 millas náuticas de la tierra más cercana, si las aguas sucias han sido previamente trituradas y desinfectadas mediante un sistema aprobado por la Prefectura, o a una distancia superior a 12 millas náuticas si no han sido previamente trituradas

o desinfectadas. En este caso, las aguas sucias que se hayan almacenado en los tanques de retención se descargarán a un ritmo moderado, estando el buque en ruta navegando a una velocidad no inferior a unos 4 nudos; o,

2. El buque utiliza una instalación para el tratamiento de aguas sucias que ha sido aprobada por la Prefectura, y
 - Los resultados de las pruebas a las que fue sometida la instalación se registran en el Certificado otorgado por la Prefectura como resultado de su inspección (según el Artículo 802.0104.);
 - El efluente no produce sólidos flotantes visibles, ni causa decoloración de las aguas circundantes.

De acuerdo con información proporcionada por personal de la Dirección de Protección Ambiental de la Prefectura Naval Argentina (PNA), con respecto a las instalaciones de tratamiento de aguas sucias se ha optado por adoptar los parámetros de la Organización Marítima Internacional, dado que es esta quien, en última instancia, aprueba el equipo para su instalación a bordo. Los parámetros adoptados son los que aparecen en la publicación “Recomendaciones sobre Normas Internacionales de Efluentes y Directrices sobre Pruebas de Desempeño para Plantas de Tratamiento de Aguas sucias” (Publicación Catálogo 1592E - en idioma inglés).

Asimismo, cabe señalar que en este Capítulo se prohíbe la descarga de aguas sucias al interior de los puertos (Artículo 802.0203.).

El Proyecto cumplirá con la normativa vigente sobre tratamiento de aguas sucias. Autoridad competente: PNA.

3.4.5.7 Contaminación por basura

El Capítulo 3 del Título 8 de REGINAVE contiene una serie de disposiciones destinadas a prevenir la contaminación del agua por basura, las cuales son adoptadas en gran parte por las contenidas en el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL 73/78).

El Artículo 2 del mencionado Capítulo establece el “Régimen de operación de descarga de buques en navegación marítima” (Artículo 803.0201). De acuerdo con este:

- a. *“Está prohibido arrojar al mar cualquier material plástico, incluidas cuerdas y redes de pesca de fibra sintética y bolsas de basura plásticas.*

La PREFECTURA NAVAL ARGENTINA determinará, mediante disposiciones complementarias, otras materias que sean necesarias para incluir dentro del régimen de esta prohibición.

- b. *La basura que se detalla a continuación será arrojada lo más lejos posible del terreno más cercano, prohibiéndose en todo caso hacerlo a una distancia menor a la indicada para cada caso.*

Cuando la basura se mezcla con otros residuos para los que se aplican diferentes requisitos de eliminación o descarga, se aplican los requisitos más estrictos.

1. *Las tablas, los revestimientos de estiba y los materiales de empaque que puedan flotar se deben arrojar a más de VEINTICINCO (25) millas de la tierra más cercana.*
2. *Los restos de comida y otro tipo de basura, incluidos los productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, artículos domésticos y cualquier otro desperdicio similar, se eliminarán a más de DOCE (12) millas de la tierra más cercana.*
3. *Los restos de comida y otro tipo de basura incluida en el inciso 2 anterior podrán ser arrojados al mar, a más de TRES (3) millas de la tierra más cercana, siempre que hayan pasado previamente por una trituradora que cumpla con las especificaciones del Artículo 803.0301”.*

Con base en lo anterior, las embarcaciones que serán contratadas por Equinor segregarán adecuadamente los residuos generados por la tripulación y se regirán por estas condiciones de

descarga de residuos. Todos los residuos que no se puedan tratar y triturar en alta mar se llevarán a tierra para su eliminación final. Autoridad competente: PNA.

3.4.5.8 Contaminación del aire por humo y hollín

El Capítulo 4 del Título 8 de REGINAVE establece una serie de disposiciones para prevenir la contaminación atmosférica por humo y hollín generados en la operación de los buques.

Según esto, se prohíbe a los buques "la emisión de humo negro en las zonas portuarias, cuando supere los valores de la escala de Ringelman fijados por la Prefectura", así como "el soplado de calderas y en general la emisión de hollín, mientras que el buque permanece en zonas portuarias" (Artículo 804.0201).

3.4.5.9 Eliminación de residuos y otros asuntos

El Capítulo 5 del Título 8 de REGINAVE regula la descarga deliberada en aguas de residuos u otras materias provenientes de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones, así como cualquier hundimiento deliberado en las aguas, de buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones.

Los buques, aeronaves, plataformas fijas o flotantes, u otras construcciones que deseen descargar en aguas de jurisdicción nacional o fuera de ellas, deberán contar con la autorización previa de la Prefectura (Artículo 805.0201).

La Prefectura establecerá las precauciones que deberá cumplir la solicitud en cuestión y la forma en que se tramitará, así como las reglas a las que se ajustará la descarga cuando se autorice (Artículo 805.0202). Por otro lado, los buques, plataformas fijas o flotantes, u otras construcciones, deben contar con los equipos y sistemas, y cumplir con las normas de diseño establecidas por la Prefectura (Artículo 805.0301).

Las embarcaciones que serán contratadas por Equinor no descargarán residuos sólidos en el mar, con excepción de los residuos alimenticios prensados o triturados a más de 12 millas náuticas según lo establecido por el Anexo V del Convenio MARPOL 73/78. Autoridad competente: PNA.

3.4.5.10 Decreto 962/1998 - Sistema nacional de preparación y lucha contra la contaminación costera, marina, fluvial y lacustre por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas

Este Decreto establece que la Prefectura Naval Argentina, como Autoridad competente de la misma, *"implementará el cumplimiento de las obligaciones, o su eventual coordinación con otras autoridades o personas de derecho privado, emanadas del Acuerdo Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990, aprobado por Ley 24.292"* (Artículo 1). Se aplica al Proyecto en términos de prevención de la contaminación por hidrocarburos y manejo de sustancias peligrosas.

A su vez, el Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación Costera, Marina, Fluvial y Lacustre por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, será administrado por la Prefectura (Artículo 2).

El Artículo 4 establece que *"las descargas de las instalaciones portuarias para el manejo de hidrocarburos, terminales petroleras, monoboyas y oleoductos, así como otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, están incluidas en el régimen instituido por este decreto"*.

También establece que *"las unidades en alta mar en operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos que produzcan descargas, además de lo ya establecido en el Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) en cuanto a su comportamiento como buques, participarán en el Régimen de Ley 22.190 en relación con sus Artículos 6 (limpieza de aguas), 14 (responsabilidad del pago de los gastos de limpieza), 15 (naturaleza del título ejecutivo de las facturas emitidas) y 16 (provisión de garantía para los gastos de limpieza)"*.

El Artículo 5 establece que, al Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) se incorpora, como Capítulo 7 del Título 8, el conjunto normativo denominado “*Sistema de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas*”, que están aprobados como Anexo I.

En el Artículo 807.0101 de REGINAVE, se designa a la Prefectura Naval Argentina como la autoridad nacional competente responsable de la preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, incluyendo su constitución como punto de contacto nacional para la recepción y transmisión de las notificaciones de contaminación por hidrocarburos establecido en el Artículo 4 del Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990.

Por su parte, y como se mencionó anteriormente, en el Artículo 807.0107. Se prohíbe la descarga de hidrocarburos y sus mezclas cuyo contenido supere las quince (15) partes por millón (ppm) y de otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas en cualquier proporción, salvo lo dispuesto en el Capítulo 6 del Título 8 de REGINAVE, a las aguas de jurisdicción nacional.

Finalmente, los operadores de unidades en alta mar en operaciones de exploración o explotación de hidrocarburos deben informar a la Prefectura Naval Argentina sobre las descargas de hidrocarburos o sus mezclas y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas en las que incurran (Artículo 807.0108).

3.4.5.11 Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina (PNA)

De acuerdo con lo dispuesto en su Ley Orgánica, la Prefectura Naval Argentina ejerce las funciones de policía de seguridad de la navegación, policía de seguridad y judicial y, parcialmente, la jurisdicción administrativa de navegación, en “mares, ríos, lagos, canales y demás aguas navegables de la Nación que sirve al tránsito y comercio interjurisdiccional”. Para todas las ordenanzas que se describen a continuación, la PNA es la autoridad competente y aplica el Proyecto en relación con la gestión de residuos y efluentes y la prevención de la contaminación.

En ejercicio de estas funciones, la Prefectura Naval Argentina ha dictado una serie de ordenanzas que serán tomadas en consideración durante la ejecución de este Proyecto, las cuales se detallan a continuación²:

Ordenanza 1/2014 - Eliminación de residuos y otros materiales en aguas nacionales

La Ordenanza 1/2014 aprueba las “Normas sobre Vertimiento de Desechos y Otras Materias en Aguas de Jurisdicción Nacional”. El Artículo 2 de la ordenanza mencionada deroga la Ordenanza Marítima 6/1980, que estableció la prevención de la contaminación por descarga de residuos y otras materias.

Cabe señalar que según esta norma se entiende por vertimiento a “*la descarga al agua de residuos y demás materiales transportados por buques, aeronaves, plataformas y otras construcciones con el propósito de su eliminación, o que se deriven de su tratamiento a bordo; no así a las descargas accidentales originadas en operaciones normales o derivadas de ellas; y la eliminación de materiales para fines distintos a la simple evacuación, siempre que su colocación no sea contraria a los objetivos del Acuerdo*”

Asimismo, el Artículo 6 indica que todo vertimiento de residuos u otra materia a cargo de buques, aeronaves, plataformas fijas o flotantes u otras construcciones, en aguas de jurisdicción nacional o en el mar, contarán con la autorización previa de la Prefectura Naval Argentina, según establece el Artículo 805.0201 del REGINAVE.

El Agregado N° 1 de la norma en estudio determina los residuos y demás materias cuyo vertimiento, en cualquier forma o condición, está prohibido según el Artículo 7.

² Las ordenanzas mencionadas se obtuvieron del sitio web oficial de la PNA: <https://www.argentina.gob.ar/prefectura naval/reglamentacion>

El Agregado N° 2 de la norma establece los factores por analizar para autorizar órdenes de descarga de dichos residuos u otras materias.

El Agregado N° 3 de la norma define los residuos u otras materias cuya descarga a las aguas requiere autorización.

A efectos de obtener la autorización antes mencionada, los interesados deben presentar la solicitud correspondiente a la Prefectura, con una anticipación no menor a 60 días a partir de la fecha, la cual deberá ser evaluada, rechazada o autorizada, realizando previamente un análisis exhaustivo de los factores que aparecen en los Agregados 2 y 3 (Artículo 9).

Las embarcaciones que serán contratadas por Equinor deberán cumplir con las disposiciones aplicables de REGINAVE en materia de descargas y con las disposiciones de la Ordenanza 1/2014 de la PNA. Autoridad competente: Prefectura Naval Argentina.

Ordenanza 3/2014 - Normas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques

La Ordenanza 3/2014 establece que las embarcaciones de navegación marítima internacional deben cumplir con los requisitos de diseño, equipamiento, régimen de descarga, inspecciones y certificación, según el Anexo IV del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques y su protocolo MARPOL. Adicionalmente, las embarcaciones de navegación marítima nacional (que es el caso de este Proyecto) cumplirán con los requisitos de diseño de equipos, entre otros, según el Capítulo 2 del Título 8 de REGINAVE (Artículo 1).

El Agregado N° 2 especifica los equipos para el tratamiento de aguas sucias que deben tener los buques, los cuales deben ser sometidos a homologación mediante pruebas por parte de la Prefectura (Artículo 4).

Por otro lado, el Agregado N° 3 establece las prescripciones según las cuales el régimen de funcionamiento de descarga de aguas sucias debe realizarse mediante bombeo de bajo caudal. Sin embargo, las embarcaciones que por su servicio no puedan cumplir con dicho régimen de descarga, retendrán los efluentes a bordo para su entrega en puerto, o contarán con un dispositivo que cumpla con los requisitos del Agregado N° 4 (Artículo 5).

Las aguas sucias cuya descarga está prohibida en alta mar serán retenidas a bordo y entregadas a puerto para ser tratadas por una empresa autorizada. Autoridad competente: PNA.

Ordenanza 2/1998 - Prevención de la contaminación por basura

La Ordenanza 2 /1998 regula la prevención de la contaminación por basura procedente de buques y plataformas. En su Artículo 1 establece que "todas las naves de matrícula nacional [...] y plataformas fijas o flotantes dedicadas a la exploración y explotación de recursos no renovables del suelo y subsuelo en aguas de jurisdicción nacional, tendrán letreros instalados en que se notifique a la tripulación y pasajeros de las normas de eliminación de basura contenidas en las Reglas 3, 4 y 5 del Anexo V del MARPOL 73/78 y en los Artículos 803.0201, 803.0202, 803.0203 y 803.0204 de REGINAVE".

En este sentido, el Artículo 3 establece que dichos letreros deben ser distribuidos "a bordo en lugares apropiados para que la tripulación y los pasajeros puedan observarlos regularmente (por ejemplo: comedores, salas de estar, principales corredores de tránsito, cubiertas de pasajeros, cubiertas de trabajo, habitaciones, puente de navegación)".

Por otro lado, el Artículo 8 determina que además del plan de manejo de basura, se debe llevar un Libro Registro de Basuras (LRB) en el que se guarden "todas las operaciones de descarga e incineración de basura, así como los casos de eliminación, derrame o pérdida accidental que se ocurran" (Artículo 10).

Finalmente, el Artículo 18 establece que las embarcaciones y plataformas mar adentro amparadas por esta ordenanza, para operar en aguas de jurisdicción nacional “deben tener a bordo el Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Basura o evidencia de la Supervisión para la Prevención de la Contaminación por Basura para Buques Extranjeros, según corresponda, cuyos formatos se indican en los Anexos 3 y 4 de este documento”.

Las embarcaciones que serán contratadas por Equinor cuentan con un plan de manejo de residuos que especifica cómo segregar todo tipo de basura y contarán con un Libro Registro de Basura con la contabilidad de lo que se produce. Autoridad competente: PNA.

Ordenanza Marítima 1/1993 - Prevención de la contaminación - “Listas de control para la prevención de la contaminación en operaciones de carga y descarga a granel de hidrocarburos o sustancias líquidas nocivas, en puertos, terminales, plataformas o monoboyas”

Para efectos de recarga en el mar, es obligatorio que los buques lleven a bordo las Listas, cuyos modelos figuran en el Anexo 1 de esta Ordenanza (según el tipo de embarcación y transporte que realicen), completadas, fechadas, selladas y firmadas con aclaración, registrando los números de Registros de Tarjeta de Embarque o PNA Autorización, según corresponda. Un requisito similar también es obligatorio para los operadores terrestres de puertos, terminales o monoboyas.

Los operadores de carga o descarga a granel de hidrocarburos o sustancias líquidas nocivas en puertos, terminales, plataformas o monoboyas están obligados a registrarse ante la Prefectura Naval Argentina, así como las empresas contratistas utilizadas por dichos operadores. El personal responsable de las operaciones también debe estar calificado.

La Disposición Conjunta de la Prefectura Naval Argentina DI-2019-21754595-APN-DPAM#PNA para OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE CARGA DE BUQUE A BUQUE, especifica los requisitos que deben cumplir las personas involucradas en el control general de asesoría de operaciones de buque a buque para su registro en el listado correspondiente, ya que implica la aplicación de los principios de mejora continua, en base a las experiencias recogidas de las mejores prácticas:

El ejercicio del control consultivo general de las operaciones buque a buque podrá ser realizado por:

- a. El Capitán o el Oficial Principal de uno de los buques involucrados en la operación, con la correspondiente licencia de manejo de cubierta.
- b. Una persona específicamente designada a cargo del control de asesoramiento general de las operaciones de buque a buque, que no es miembro de la tripulación de las embarcaciones que participan en las operaciones.

Si se opta por la alternativa b), la Persona designada a cargo del control general de asesoría de las operaciones de buque a buque deberá estar inscrita en el "NOMBRE DE LAS PERSONAS DESIGNADAS A CARGO DEL CONTROL DE ASESORAMIENTO GENERAL DE LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE CARGA DE BUQUE A BUQUE", de acuerdo con los requisitos adjuntos en el ANEXO identificado como DI-2019-21754595-APN-DPAM#PNA.

En el caso del Proyecto de Equinor sería el Capitán o Primer Oficial de la embarcación de apoyo quien esté completamente familiarizado con la maniobra de trasvase de combustible. Autoridad competente: PNA.

Ordenanza 15/1998 - Prevención de la contaminación del agua por hidrocarburos

La Ordenanza PNA 15/1998 bajo análisis establece disposiciones para la prevención de la contaminación del agua por hidrocarburos de las salas de máquinas en los buques con un arqueo bruto menor a 400 unidades y plataformas, según se define en el Artículo 801.06.01 del Título 8 de REGINAVE.

Dicha norma establece en su Artículo 2, los equipos, dispositivos y sistemas para la prevención de la contaminación por hidrocarburos que deben tener a su disposición los buques y plataformas que operen fuera de las zonas de especial protección.

Las embarcaciones que serán contratadas por Equinor cuentan con un plan de emergencia por derrames de hidrocarburos (kit SOPEP) de acuerdo con MARPOL 73-78 Apéndice 1, regla 37, el cual será implementado en caso de siniestro. Autoridad competente: PNA.

Ordenanza 8/1998 - Plan Nacional de Contingencia (PLANACON)

La Ordenanza 8/1998 de la Prefectura Naval Argentina aprueba el Plan Nacional de Contingencia (PLANACON) y el cronograma de presentación de los planes de emergencia que aportan a dicho Plan, ya que REGINAVE requiere que cada sector portuario, empresas exploradoras y/u operadores de hidrocarburos y los buques deben contar con Planes de Contingencia, cuyo cumplimiento es auditado por la Prefectura.

En cuanto a su organización, PLANACON establece tres niveles de respuesta:

- Centro Nacional de Control de Derrames de Contaminantes (CENACODECON);
- Centro Zonal de Control de Derrames de Contaminantes (CEZOCODECON); y
- Centro Local de Control de Derrames de Contaminantes (CELOCODECON).

El Capítulo 3 del PLANACON establece la Política Nacional de Respuesta para atender situaciones de contaminación y limpieza de aguas bajo jurisdicción nacional.

Los Capítulos 5 y 6 del PLANACON establecen las directrices relacionadas con la Administración y Logística y los Informes y Comunicaciones del Plan, respectivamente.

En el Anexo 20 del PLANACON se establecen las “Directrices para la elaboración de Planes de Emergencia de Empresas a cargo de unidades en alta mar que realicen operaciones de exploración o explotación petrolera” que son aplicables a este Proyecto. Asimismo, en el Anexo 21 se señalan las “Directrices para la elaboración de planes de emergencia a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos u otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas”. Este último tiene como objetivo, orientar al capitán y a los oficiales del buque sobre las medidas que deben tomarse cuando se produce un evento de contaminación, mientras que el primero se centra en las comunicaciones y notificaciones externas que se deben realizar.

Por disposición DISFC-2019-1379-APN-PNA#MSG se aprueba la rectificación de dicha Ordenanza 8-1998. En particular, para el Volumen 6 "RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE" titulado "PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA".

La Autoridad competente es Prefectura Naval Argentina (PNA).

Disposición 6/2014 - Directrices para desarrollar planes de emergencia para derrames de sustancias peligrosas, peligrosas, potencialmente peligrosas y nocivas

El citado documento tiene como finalidad hacer cumplir el desarrollo y presentación de los planes de emergencia aplicables a todo propietario, licenciario, operador de puertos, terminales o embarcaciones (tanto nacionales como internacionales que naveguen en aguas argentinas) relacionados con los productos antes mencionados. Por lo tanto, el documento presenta las directrices correspondientes exigibles a las instalaciones, puertos y embarcaciones que manejan dichos materiales, con el objetivo de incluir los planes de emergencia resultantes al Sistema Nacional de Preparación y Lucha contra la Contaminación Costera, Marina, Fluvial y Lacustre por Hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

Siguiendo las directrices presentadas, todas las embarcaciones que estarán implicadas en el Proyecto contarán con un Plan de Emergencia que servirá como prevención y, en caso de ocurrir, medidas de mitigación en cuanto al uso y potencial derrame de materiales peligrosos a bordo.

3.4.5.12 *Otras Normas de la Prefectura Naval Argentina*

Ordenanza 1/1998 – Normas para la autorización del uso de productos químicos

Aprueba las normas para la autorización del uso de productos químicos para combatir la contaminación de aguas por derrames de hidrocarburos, incluidos dispersantes, surfactantes, disolventes u otros agentes químicos, de fabricación nacional o extranjera. Esta ordenanza se aplicará en el caso de que se utilicen este tipo de productos si ocurre una emergencia.

Según el mismo, aquellos productos que superen satisfactoriamente las pruebas y requisitos establecidos serán incluidos en una lista que llevará la Dirección de Protección Ambiental de la Prefectura.

Ordenanza 5/1999 - Normas para la calificación, registro y reinscripción de empresas prestadoras de servicios a terceros, dedicadas al control de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas

El Artículo 1 amplía el alcance de la Ordenanza Marítima 6/1994 y menciona que las empresas prestadoras de servicios dedicados al control de Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas, deben inscribirse en el Registro que para tal efecto opera en el ámbito de la Dirección de Seguridad de la Policía de Navegación de la Prefectura Naval Argentina. Con referencia en el Artículo 2, así como faculta al Director de Protección Ambiental para tramitar la incorporación al mismo Registro, dedicándose a otros aspectos que contribuyan a las tareas de Control de Derrames. Con referencia al Artículo 6, las empresas extranjeras pueden prestar servicios a terceros en el control de derrames de hidrocarburos, sustancias nocivas y potencialmente peligrosas dentro de la jurisdicción nacional, mediante convenios celebrados con empresas locales autorizadas.

Ordenanza 7/2017 – Normas para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones Flotantes

Esta Ordenanza de "Normas para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, Artefactos Navales u otras Construcciones Flotantes" tiene como objetivo colaborar con gobiernos, autoridades competentes, capitanes de buques, compañías navieras, armadores, autoridades portuarias y otros actores en la gestión y control de agua de lastre, así como de sedimentos, con el fin de minimizar el riesgo de introducción de organismos acuáticos perjudiciales y patógenos existentes en el agua de lastre y en sus sedimentos, sin poner en peligro la seguridad del buque. La resolución incluye disposiciones generales, prescripciones y normas para procedimientos operativos para los buques.

Siguiendo las directrices de la PNA, el Proyecto contará con un programa de manejo de descarga de aguas residuales, como parte del Plan de Gestión Ambiental y con el fin de gestionar el agua de lastre acorde a las directrices elaboradas al respecto por la Organización Marítima Internacional. Estas medidas de mitigación se aplicarán para preservar la calidad del agua de mar e indirectamente, los efectos potenciales de la biota.

Ordenanza 3/2000 – Sistema Armonizado de Reconocimientos y Certificación

Esta Ordenanza aprueba los modelos del Certificado Internacional para la Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos, el Certificado Internacional para la Prevención de la Contaminación para el Transporte de Sustancias Líquidas Nocivas a Granel, el Certificado Internacional de Aptitud para el Transporte de Productos Químicos Peligrosos a Granel, el Certificado Internacional de Aptitud para el Transporte de Gases Licuados a Granel, y Certificado de Aptitud para el Transporte de Productos Químicos Peligrosos a Granel, así como las directrices para la implantación de un sistema armonizado de reconocimientos y certificación, de acuerdo con las especificaciones del Tratado Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (1974) y las Resoluciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).

De ser requerido, las embarcaciones implicadas en el Proyecto presentarán a la PNA el Certificado Internacional para la Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos.

Ordenanza 06/2003 (DJPM) - Normas para la Implementación del Sistema Integral de Protección Portuaria

A través de la Ordenanza 06/2003 (DJPM), la Prefectura Naval Argentina estableció los requisitos que deben cumplir las Instalaciones Portuarias alcanzadas por el Código PBIP para obtener su correspondiente Declaración de Cumplimiento, y también para aquellos otros elementos del Sistema Portuario Argentino, que sin estar alcanzados por el mencionado instrumento internacional, deben obtener su Documento Nacional de Protección, con el fin de certificar el cumplimiento de los estándares de protección portuaria fijados para nuestro país.

3.4.5.13 Disposiciones de la Prefectura Naval Argentina

Disposición 02/2008 Dirección de Protección Ambiental (DPAM) - Adopción de resoluciones y directrices relacionados con el tratamiento de Aguas Servidas

Esta disposición a través de su Artículo 1 adopta las resoluciones de la Asamblea (A), el Comité de Seguridad Marítima (MSC) y el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima Internacional (OMI), en sus formas modificadas, a los efectos de su integración en el marco técnico para las tareas de los Inspectores en Prevención de la Contaminación de la PNA. La autoridad competente de esta disposición es la PNA, y se aplica en materia de gestión de aguas sucias y descargas. Entre los acuerdos adoptados, destaca un conjunto de acuerdos relacionados con el tratamiento de Aguas Servidas:

- MEPC.2 (VI) "Recomendación para una norma internacional sobre efluentes y directrices para las pruebas de rendimiento en plantas de tratamiento de aguas sucias" (publicación 592E del catálogo de la OMI);
- MEPC.157 (55) "Normas relativas al régimen de descarga de aguas sucias no tratadas por buques"; y
- MEPC.159 (55) "Directrices modificadas sobre la implementación de normas relacionadas con efluentes y pruebas de funcionamiento de las instalaciones de tratamiento de aguas sucias", que se encuentran en los documentos MEPC 55/10/3 y BLG 10 / WP.4, respectivamente. (Reemplaza a MEPC.2 (VI). Esta resolución establece los límites de volumen que deben alcanzar las plantas de tratamiento:
 - Bacterias coliformes termotolerantes $\leq 100/100$ ml
 - Sólidos suspendidos totales ≤ 35 mg/l
 - Demanda bioquímica de oxígeno ≤ 25 mg/l
 - Demanda química de oxígeno ≤ 125 mg/l
 - pH ≥ 6 y $8.5 \leq$
 - Cloro ≤ 0.5 mg/l

Disposición 03/2008 DPAM – Adopción de resoluciones, directrices y procedimientos relacionados con la Elaboración de Planes de Emergencia a Bordo y notificación de posibles derrames

Esta disposición aprueba numerosas resoluciones y directrices aplicables, tales como:

- MEPC.85 (44) - "Directrices para la Elaboración de Planes de Emergencia a Bordo contra la Contaminación del Mar por Hidrocarburos o Sustancias Líquidas Nocivas". En este, se establecen directrices generales para la elaboración de los planes:

El procedimiento que debe seguir el capitán u otras personas al mando del buque para notificar un evento que involucre contaminación por hidrocarburos o por sustancias líquidas nocivas, de acuerdo

con lo establecido en el Artículo 8 y el Protocolo I de esta Convención, con base en la Directrices desarrolladas por la Organización;

La lista de autoridades o personas a quienes se debe dar aviso en caso de evento que involucre contaminación por hidrocarburos o sustancias líquidas nocivas;

Una descripción detallada de las medidas que deberán tomar inmediatamente quienes se encuentren a bordo para reducir o contener la descarga de hidrocarburos o sustancias líquidas nocivas resultantes del evento;

Los procedimientos y el punto de contacto a bordo para coordinar con las autoridades nacionales y locales las medidas para combatir a la contaminación por hidrocarburos o sustancias líquidas nocivas que se lleven a bordo.

La Disposición 03/2008 establece la importancia de notificar posibles derrames. Equinor es consciente de ello ya que ha desarrollado un plan de emergencia ante derrames de hidrocarburos. Autoridad competente: PNA.

3.4.6 Residuos peligrosos y oleosos

3.4.6.1 Normas nacionales

Ley 24.051, Decreto Reglamentario 831/1993 y normas complementarias - Residuos Peligrosos

La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos regula la generación, manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos (a) cuando se trata de residuos generados o ubicados en lugares sujetos a la jurisdicción nacional, (b) cuando se trata de residuos que, aunque se encuentren ubicados en territorio provincial, estén destinados al transporte fuera de él (transporte interjurisdiccional) o (c), cuando a criterio de la autoridad competente, dichos residuos puedan afectar a las personas o al medio ambiente más allá de la frontera de la provincia en que fueron generados (Artículo 1). La autoridad competente es el MAYDS.

El Artículo 4 establece que la autoridad de aplicación, deberá llevar y actualizar un registro nacional de generadores y operadores de residuos peligrosos donde deben registrarse como responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final, y este registro debe renovarse anualmente, como se destaca en el Artículo 5.

Teniendo en cuenta lo anterior, las disposiciones de esta ley (excepto las relativas a la responsabilidad civil y penal) serán de aplicación al Proyecto en caso de que se realice transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos.

Sin embargo, es importante señalar que, como ley mixta, la Ley 24.051 se puede aplicar en todo el territorio nacional sin necesidad de adhesión previa, respecto de los regímenes de responsabilidad civil y penal que aprueba en sus Capítulos VII y IX (dado que se trata de poderes delegados según el Artículo 75, inciso 12 de la CN).

Finalmente, cabe señalar que el Anexo II del Decreto 831/1993, que reglamenta la Ley 24.051, establece una serie de Niveles Guía de Calidad Ambiental para agua, aire y suelo que pueden ser utilizados como referencia en el marco de este documento.

Los residuos peligrosos generados en las operaciones de Equinor serán almacenados y luego transportados tierra adentro para su adecuada disposición, contratando empresas locales autorizadas. Por lo tanto, esta ley se aplica a la gestión de residuos peligrosos a bordo y en tierra. Además de llevar un registro de cantidades, origen, transferencia del generador al transportador y del transportador a la planta de tratamiento o de disposición final, como se menciona en el Artículo 12.

3.4.6.2 Normas provinciales

En relación con los residuos peligrosos, si es necesario tratarlos y/o disponerlos en tierra, las embarcaciones auxiliares utilizarán el puerto logístico para ingresar los residuos desde el mar al territorio provincial.

Las embarcaciones utilizarán, tentativamente, el Puerto de Mar del Plata debido a su proximidad al área de estudio y disponibilidad de infraestructura.

Dado que la definición final de la terminal marítima por utilizar dependerá de la aprobación de Equinor y de la preferencia del contratista de la nave perforadora, y para incluir las normativas provinciales potencialmente aplicables, esta sección se refiere a las relativas a los residuos no peligrosos de la Provincia de Buenos Aires. Autoridad provincial competente: Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (Ex "Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible – OPDS).

Ley 11.720 y Decreto Reglamentario 806/1997 - Residuos peligrosos (Provincia de Buenos Aires)

Esta ley se aplica a la generación, manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos generados o ubicados en jurisdicción provincial. Se consideran peligrosos aquellos residuos enumerados en los anexos de esta norma, así como todos los residuos que directa o indirectamente representen un riesgo para la salud o el medio ambiente en general.

Los responsables de la generación, transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos deben estar inscritos en el "Registro Provincial de Generadores y/u Operadores de Residuos Peligrosos", así como contar con un certificado de renovación anual ("Certificado de Habilitación Especial"). Los generadores deben separar adecuadamente los residuos, empaquetarlos y etiquetar los contenedores.

Esta ley obliga a inscribir en el "Registro Provincial de Tecnologías" las tecnologías aplicadas a los servicios de almacenamiento, recuperación, reducción, reciclaje, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.

Se debe utilizar un manifiesto detallando *"la naturaleza y cantidad de los residuos, su origen, traslado del generador al transportista y, luego, a la planta de tratamiento, almacenamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y disposición y cualquier otra operación realizada"* (Artículo 20 de la Ley 11.720).

Los residuos peligrosos derivados de las operaciones normales de los buques, tales como aguas de sentina, lavaderos, agua de lavado de tanques y otros residuos aceitosos y de mantenimiento, se incluyen en el régimen de la Ley 11.720 cuando son trasladados a instalaciones fijas en tierra para su tratamiento o disposición final.

Los buques contratados por Equinor generarán diferentes tipos de residuos, entre ellos, potenciales residuos de hidrocarburos que serán tratados y dispuestos en tierra. La autoridad competente en la Provincia de Buenos Aires es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Resolución 592/2000 - Residuos peligrosos, almacenamiento transitorio, requisitos técnicos, registro de operaciones.

Esta resolución proporciona las condiciones para almacenar residuos peligrosos en el sitio del generador. Se incluye, entre otras, que los residuos deben almacenarse en áreas cubiertas o semicubiertas, agrupadas según su tipo para permitir su fácil contabilización. Se deben utilizar envases uniformes, etiquetados con su contenido genérico y su constituyente especial, con la fecha de entrada al área de almacenamiento y su nivel de riesgo. Las etiquetas utilizadas deben ser inalterables por la acción del agua, el sol o por el propio producto almacenado. Asimismo, se deberá prever la distancia necesaria para todos los residuos incompatibles, o disponer de medios efectivos de separación y

mantenerlo a salvo de terceros. Los envases deben ser adecuados para las sustancias contenidas, de manera que se garantice su integridad y, según corresponda, hermeticidad.

Por otro lado, se utilizarán los formularios denominados "Registro de operaciones". Allí se asentarán todos los movimientos de residuos, desde su generación hasta su disposición final. En relación con esta resolución, las embarcaciones tendrán a bordo un Libro de Registro donde se informará la generación de residuos. Además, los residuos generados serán categorizados y debidamente almacenados. La autoridad competente es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Ley 11.347 y Decreto Reglamentario 450/1994 (modificado por Decreto 403/1997) - Tratamiento, transporte y disposición final de residuos patógenos.

Esta norma establece que el generador de residuos patógenos debe asegurar su adecuado tratamiento, transporte y disposición final. La autoridad competente es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, y aplica al Proyecto en caso de que se genere algún residuo patógeno a bordo, por ejemplo, en relación con emergencias sanitarias.

Establece 3 registros: generadores, transportistas y plantas de tratamiento. Los generadores de residuos patógenos deben estar inscritos en el "Registro provincial de generadores".

El generador será responsable de la supervisión y capacitación del personal que maneje los residuos patógenos o realice el mantenimiento, limpieza y desinfección de los lugares utilizados en el manejo de los residuos sanitarios.

Divide los residuos patógenos en 3 tipos: Tipo A, Tipo B y Tipo C. Cada uno de los diferentes tipos debe desecharse temporalmente en bolsas de determinadas características y etiquetarse de acuerdo con las tarjetas de control establecidas en el Anexo IV del reglamento y luego desecharse por operadores autorizados.

Con respecto a esta ley, en caso de que se generen residuos patógenos, estos serán almacenados y eliminados una vez que lleguen al Puerto por una empresa autorizada.

Resolución OPDS 46/2015 – Certificación de recepción de residuos

Establece el uso obligatorio del "Certificado de Recepción de Residuos", como forma de fiscalizar y controlar la trazabilidad de los residuos derivados del funcionamiento normal de los buques una vez que abandonan la embarcación para su tratamiento o disposición final en instalaciones fijas en tierra. La Autoridad competente es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y se aplica al Proyecto en relación con la gestión de residuos en tierra.

Resolución OPDS 648/2015 - Obligatoriedad de la descarga de todos los residuos a bordo, para todos los buques, que recalen en los puertos de la Provincia de Buenos Aires

Establece la obligación de descargar todos los residuos a bordo, para todas las embarcaciones señaladas en la Resolución 538/2015, que utilicen los puertos de la Provincia de Buenos Aires, aunque su origen sea de otro puerto de Argentina. Su autoridad competente es el organismo que reemplaza a la anterior Subsecretaría de Actividades Portuarias y se aplica al Proyecto en cuanto a disposición de residuos terrestres e instalaciones de recepción en el puerto.

Equinor eliminará todos los residuos generados en la embarcación una vez que llegue a puerto mediante una planta de tratamiento autorizada. Autoridad competente: anterior Subsecretaría de Actividades Portuarias.

Resolución OPDS 538/2015 – Plan de Gestión de Trazabilidad de residuos de buques

La Universidad Tecnológica Nacional elaboró un Plan de Gestión de Trazabilidad de Residuos de Buques (GTRB), el cual fue aprobado por esta resolución, resultando en su aplicación obligatoria.

En su Artículo 6 establece que el actual sistema GTRB se aplicará a todos los buques de bandera extranjera y navegación internacional, aunque hayan tocado previamente otros puertos argentinos en otras provincias, con excepción de los que se encuentran amparados por el Artículo 2 del Decreto PEN 1.010/2004.

La autoridad competente es el organismo que reemplaza a la anterior Subsecretaría de Actividades Portuarias y se aplica al Proyecto en cuanto al programa de manejo de residuos que se desarrollará en el Plan de Gestión Ambiental.

3.4.7 Residuos no peligrosos

3.4.7.1 Normas nacionales

Ley 25.612 - Gestión integral de residuos industriales y actividades de servicios

La Ley 25.612 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en la gestión integral de residuos de origen industrial y actividades de servicios, que se generan en todo el territorio nacional, y se derivan de procesos industriales o actividades de servicios.

Decreto 770/2019 - Régimen de navegación marítima, fluvial y lacustre (REGINAVE)

El Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) establece una serie de disposiciones para prevenir la contaminación del agua por basura.

Las embarcaciones que serán contratadas por Equinor cuentan con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos que establece que todos los residuos serán categorizados y separados según su material.

Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina (PNA)

En cuanto a los residuos no peligrosos, también deben tenerse en cuenta las disposiciones de la Ordenanza 2/1998 de la PNA para la Prevención de la Contaminación por Basura, que se detallan en la sección correspondiente.

El Plan de Gestión de Residuos prevé la eliminación adecuada de todo tipo de residuos. Autoridad competente: PNA.

Resolución SENASA 174/2010 - el Plan Nacional de Prevención de Ingreso y Transmisión de Plagas y Enfermedades a través de Residuos Regulados

La Resolución 174/2010 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), aprueba el Plan Nacional de Prevención de Ingreso y Transmisión de Plagas y Enfermedades a través de Residuos regulados, cuyo objetivo es realizar un control zoofitosanitario en los puntos de ingreso al Territorio de la República Argentina respecto de los residuos provenientes del exterior, para prevenir e impedir el ingreso de plagas y enfermedades que se transmiten o puedan transmitirse a través de residuos.

La Resolución establece en su Anexo I, su ámbito de aplicación que corresponde a todos los sitios donde se produzca el ingreso a la República Argentina de residuos regulados provenientes del exterior, incluyendo, puertos fluviales y marítimos.

Asimismo, en el Capítulo I Sección 4 del Anexo I, define como residuos regulados a “los desechos de productos, subproductos y derivados de origen vegetal o animal resultantes de los ciclos de producción, consumo y comercialización. Comprende los desechos de cocina procedentes de medios de transporte internacionales, restaurantes, servicios de catering, cocinas y demás servicios brindados a bordo de las empresas de transporte internacional, los productos de potencial riesgo zoofitosanitario regulados por el SENASA, productos de las operaciones de importación comercial, como así también, todos aquellos originados como consecuencia de controles sanitarios de los viajeros, sus equipajes y medios acompañados procedentes del exterior”.

Quedan excluidos del reglamento de esta ley los residuos peligrosos, los envoltorios, envases primarios y los elementos descartables, los materiales o sustancias desechables no inherentes a los productos regulados por el SENASA.

En el Capítulo I Sección 7 del Anexo I, establece que la gestión adecuada de los residuos debe comprender el acondicionamiento, descarga, transporte y tratamiento en planta de los residuos, incluyendo este último paso, el tratamiento térmico y disposición final de los mismos.

Por su parte, el Capítulo II Sección 1 del Anexo I, establece la responsabilidad del Generador de cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Residuos, respecto de los residuos que porta el transporte a su cargo. Asimismo, en el Capítulo III, se detallan las obligaciones del Plan, registros, formas de acondicionamiento de residuos, obligaciones del transporte, entre otros.

Finalmente, el Capítulo V del Anexo I, establece las condiciones particulares y obligaciones para los residuos generados en embarcaciones proveniente del exterior y en embarcaciones provenientes de un puerto argentino, que arribe a otro puerto del país, ubicado en una región protegida con estatus sanitario diferencial.

Resolución SENASA 77/2019 - Programa Nacional de Prevención de Ingreso y Transmisión de Plagas y Enfermedades a través de Residuos Orgánicos Regulados.

El 1 de febrero de 2019, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 77/2019, que aprueba el Programa de Residuos Orgánicos Regulados para la gestión de los residuos regulados desde su generación, clasificación, descarga, transporte y disposición final.

El programa tiene como objetivo definir la gestión y responsabilidades propias del SENASA y de cada uno de los actores intervinientes en la gestión de los residuos regulados, de manera de cumplir con la meta de prevenir el ingreso y transmisión de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria, el cuidado del medio ambiente y la salud, desarrollando procedimientos y ejercicios de control y supervisión en todo punto de ingreso crítico al territorio nacional.

Según su Anexo I, se entiende como residuo orgánico a los desechos de productos, subproductos y derivados de origen vegetal o animal resultantes de los ciclos de producción, consumo y comercialización, excepto aquellos que por el nivel de proceso no tengan riesgo zoonosanitario. Asimismo, se establece el procedimiento y formularios que deberán cumplirse para la descarga de los residuos.

Finalmente, la Resolución remite al régimen sancionatorio previsto en la Ley 27233 de Sanidad de los Animales y Vegetales.

3.4.7.2 Normas provinciales

En relación a los residuos no peligrosos, si es necesario tratarlos y/o disponerlos en tierra, las embarcaciones utilizarán el puerto logístico para ingresar los residuos desde el mar al territorio provincial. Si bien los residuos asimilables a los alimentos serán triturados y vertidos en alta mar, existen otras categorías que potencialmente podrían ingresar al territorio provincial para su tratamiento, disposición o venta (en el caso de los reciclables).

Las embarcaciones utilizarán, tentativamente, el Puerto de Mar del Plata debido a su proximidad al área de estudio y disponibilidad de infraestructura.

Dado que la definición final de la terminal marítima por utilizar dependerá de la aprobación de Equinor y de la preferencia del contratista de la nave perforadora, y para incluir las normativas provinciales potencialmente aplicables, esta sección se refiere a las relativas a los residuos no peligrosos provenientes de la provincia de Buenos Aires.

Ley 13.592 - Residuos sólidos urbanos. Procedimientos de gestión.

Esta norma establece los procedimientos para el manejo de residuos sólidos urbanos en la provincia de Buenos Aires. Establece los principios y objetivos de la política ambiental en materia de residuos

sólidos urbanos. Define las responsabilidades de las autoridades provinciales y los municipios. Describe los contenidos mínimos del programa de gestión de residuos sólidos urbanos; entre otros.

Una vez que los residuos están en tierra, se clasificarán y eliminarán en consecuencia, según el tipo. La autoridad competente de esta ley es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Resoluciones portuarias

En el caso de residuos no peligrosos, se aplican las mismas normas que las descritas para residuos peligrosos: Resolución 46/2015, Resolución 648/2015 y Resolución 538/2015. El Operador Portuario es quien gestiona los centros de almacenamiento de residuos del buque, y quien debe entregar un Certificado de Recepción de Residuos, como forma de controlar la trazabilidad de los residuos derivados de las operaciones normales de los buques. Los buques están obligados a descargar todos los residuos a bordo, incluso si provienen de otro puerto de la República Argentina. Asimismo, es de obligado cumplimiento el Plan de Gestión de Trazabilidad de Residuos de Buques (GTRB), elaborado por la Universidad Tecnológica Nacional, como se mencionó anteriormente.

La autoridad competente es el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y aplica al Proyecto, ya que la empresa que sería contratada para el manejo y disposición de residuos tendrá un certificado para tener la trazabilidad de los residuos.

3.4.8 Efluentes líquidos y calidad del agua

3.4.8.1 Normas nacionales

Ley 25.688 - Régimen de gestión ambiental del agua

A nivel nacional, la Ley 25.688 establece los presupuestos ambientales mínimos para la preservación del agua, su uso y uso racional. Nos referimos a sus disposiciones, previamente analizadas.

Decreto 770/2019 - Régimen de navegación marítima, fluvial y lacustre (REGINAVE)

El Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) recibe las disposiciones del Convenio MARPOL 73/1978 en materia de prevención de la contaminación del agua por hidrocarburos y aguas sucias en los Capítulos 1 y 2 del Título 8 "Prevención de la Contaminación por Buques".

Ordenanzas de la Prefectura Naval Argentina (PNA)

La Prefectura Naval Argentina (PNA) ha aprobado una serie de ordenanzas que regulan la descarga de efluentes líquidos a las aguas y establecen directrices para prevenir la contaminación de las aguas por hidrocarburos, a lo que nos referimos anteriormente en este capítulo.

3.4.9 Flora y fauna

3.4.9.1 Normas nacionales

Ley 22.421 – Ley de conservación de la fauna

El régimen establecido por la Ley 22.421 (1981), como puede leerse en el Art. 1, tiende principalmente a la protección de la fauna silvestre, la cual se declara de interés público al mismo tiempo que se establece un sistema de adhesión que permite la incorporación de las provincias al sistema, mediante el mecanismo de sanción legislativa en tal sentido. La protección penal se dispensa mediante la clasificación de diversas figuras delictivas que tienden, fundamentalmente, a prevenir la caza furtiva, actividad de la que, en la gran mayoría de los casos, se derivan la depredación y el tráfico ilegal de especies. La autoridad competente (por Decreto 666/1997) es el actual Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Es necesario mencionar que, lo que establece la ley de fauna no impacta a los animales incluidos en las leyes de pesca que se desarrollan a continuación. El siguiente párrafo es un extracto de la ley:

“Los animales incluidos en las leyes de pesca están excluidos del régimen de esta Ley. La autoridad jurisdiccional aplicable acordará con la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos la división correspondiente en casos dudosos”.

El Proyecto de perforación de Equinor brinda mecanismos y programas para mitigar los impactos de la fauna marina, los cuales se desarrollan en el Plan de Gestión Ambiental para este estudio. Cabe señalar que, Equinor operará en línea con esta normativa, prohibiendo a bordo la caza de animales, el tráfico o cualquier otro tipo de actividad vinculada a la depredación de vida silvestre. Asimismo, el personal involucrado en estas tareas recibirá la formación adecuada. Por otro lado, en la Línea Base Ambiental (LBA) de este estudio se han identificado y registrado aquellas especies en categorías de amenaza que podrían encontrarse en el área de influencia del Proyecto.

Resolución MArDS 218/2021 - Red Federal de asistencia a varamientos de fauna marina

La Resolución estructura la creación de la red federal de asistencia a varamientos de fauna marina con el objetivo general de favorecer la articulación y cooperación entre las jurisdicciones de BUENOS AIRES, RÍO NEGRO, CHUBUT, SANTA CRUZ, TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, ENTRE RÍOS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, ENTRE RÍOS y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, agencias nacionales, sociedad civil e instituciones científicas académicas ante eventos que involucren fauna marina en situación de vulnerabilidad por varamientos o llegadas costeras.

Resolución MArDS 201/2021 - "Protocolo para la implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas"

Esta Resolución aprueba el "Protocolo para la implementación del monitoreo de la fauna marina en prospecciones sísmicas".

También aprueba los "Formularios de registro y soporte para el monitoreo de la fauna marina en prospecciones sísmicas". Estos formularios estandarizados estarán disponibles para su descarga en formato editable en el sitio web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Este protocolo tiene dos objetivos principales:

1. Establecer las acciones, criterios y contenidos mínimos para el diseño de procedimientos específicos que implementen medidas de mitigación en el marco del PGA para evitar y reducir el impacto de las prospecciones sísmicas sobre la fauna marina.
2. Estandarizar la información generada sobre las ocurrencias y comportamientos de los especímenes o grupos de fauna que pudieran ser detectados, tanto para profundizar en el conocimiento de los posibles efectos de esta actividad como para ampliar la información de línea de base.

Cabe señalar que, a pesar de que esta resolución se aplica específicamente al monitoreo de fauna marina en proyectos sísmicos (no a la perforación de pozos exploratorios en alta mar como en el caso del Proyecto de Equinor), se tomará como una guía de referencia en caso de que ocurra algún avistamiento de fauna marina durante la operación. Se considerarán los formularios de registro y los procedimientos y formatos de presentación de informes, como se aborda en este protocolo. Autoridad competente: MArDS.

Resolución 795-E/2017 - Clasificación de aves nativas. Categorización del estado de conservación de las aves nativas 2015. 13/11/2017 (BO 14/11/2017).

Dicha Resolución aprueba la clasificación de aves nativas de acuerdo con el orden establecido en el Artículo del Decreto 666/1997, que como Anexo I forma parte integrante del mismo.

También aprueba la subcategoría "En Peligro Crítico de Extinción", integrada por aquellas especies de aves que, al estar clasificadas en la categoría "En Peligro Crítico de Extinción", se encuentran en un

estado crítico de conservación. Las especies incluidas en esta subcategoría se enumeran en el Anexo II de la Resolución.

Se aprueban como elementos de referencia los listados de aves nativas extintas o posiblemente extintas, aves endémicas y aves exóticas introducidas en la República Argentina (Anexo III) de la Resolución.

Se establece que aquellas especies nativas que no estén identificadas en los Anexos que forman parte de la Resolución deben ser consideradas como "Especies Insuficientemente Conocidas".

En la Línea Base del presente estudio se ha analizado la categoría de amenaza asignada a nivel nacional e internacional y los endemismos, tomando en cuenta la clasificación de Aves Nativas de la Resolución 795-E/2017, y el Informe "Categorización de las Aves Argentinas según su estado de conservación" del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y Aves Argentinas³. La autoridad competente es el MAyDS.

Ley 24.922 - Ley Federal de Pesca

La Ley Federal de pesca y su decreto reglamentario N° 748/1999, establece el Régimen Federal de Pesca Marítima, por el cual se regularán las actividades pesqueras y el procesamiento de los recursos marinos vivos.

Según su texto, la Nación Argentina *"promoverá el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el uso racional de los recursos marinos vivos. Promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionará la sustentabilidad de la actividad pesquera, fomentando la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo el desarrollo de procesos industriales ambientalmente adecuados que promuevan la obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra argentina"* (Artículo 1).

En términos de dominio y jurisdicción, este reglamento establece que están *"bajo el dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del marco federal establecido en este documento. Los recursos vivos que pueblan las aguas interiores y el mar territorial argentino aledaño a sus costas, hasta doce (12) millas náuticas medidas desde las líneas de base que son reconocidas por la legislación nacional pertinente"* (Artículo 3).

Por otro lado, el *"dominio exclusivo y jurisdicción de la Nación son los recursos marinos vivos existentes en las aguas de la Zona Económica Exclusiva Argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las doce (12) millas señaladas en el artículo anterior"* (Artículo 3).

Equinor se asegurará de que no se realicen actividades de pesca en ninguna de las embarcaciones que se contraten para el Proyecto, en estricto cumplimiento de las normas pertinentes y aplicables en territorio argentino.

3.4.9.2 Marco normativo de la pesca

Resolución 973/1997 - Adoptar medidas en relación con las empresas fabricantes de embarcaciones de bandera argentina autorizadas para la captura de calamar (*Illex argentinus*)

Las empresas constructoras de embarcaciones de bandera argentina autorizadas para la captura de calamar (*Illex argentinus*), ya sean embarcaciones equipadas con sistema de poteras o arrastreros con permiso de pesca para todas las especies, previo a la expedición de la Resolución 959 (del 5 de octubre de 1992 del registro de la anterior SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA), o las autorizadas a capturar dichas especies incorporadas mediante el ACUERDO DE RELACIONES EN

³ MAyDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Aves Argentinas) (2017). Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos Aires, Argentina. 145 pp

PESCA MARÍTIMA suscrito con la UNIÓN EUROPEA aprobado por Ley 24.315, podrán operar con ellos en el área geográfica delimitada por las coordenadas 45° y 48° de latitud sur y este de la línea de demarcación de la Zona Económica Exclusiva Argentina, establecida por Ley 23.968 del 15 de diciembre al 31 de agosto de cada año y su norma complementaria mediante Ley 27.557 del 25 de agosto del 2020.

El EsIA establece distancias de seguridad para evitar posibles interferencias con los buques pesqueros en el área de influencia. Las embarcaciones del Proyecto evitarán interponerse en el camino de otras embarcaciones, y esto se aplica a aquellos que pescan calamar argentino. La autoridad competente es la Secretaría de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación, actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP).

Resolución CFP 4/2008 - Establece medidas de manejo para la pesquería de vieira patagónica

La Resolución 4/2008 del Consejo Federal Pesquero (CFP) describe las prácticas de la pesquería de la especie de vieira patagónica (*Zygochlamys patagónica*) indicando los métodos de pesca y la temporada en la que se puede realizar. El Consejo Federal de Pesca establecerá vedas en base a informes científicos con información sobre el grado de reproductividad de la especie. Se especificarán los valores de Captura Máxima Permisible o Captura Máxima Permitida ("CMP") sugeridos por el INIDEP.

También se establecerán controles de captura mediante la definición de Unidades de Manejo (espacio delimitado para pesca). Una vez alcanzado la CMP establecida según el Artículo 5, la Unidad de Manejo tendrá veda para la pesca. Se describen las prohibiciones que se aplicarán a cualquier embarcación en violación. Estas unidades de manejo de vieiras están mapeadas e incluidas en el análisis de este estudio de impacto ambiental. Si bien no existen restricciones para que el Proyecto se superponga a las unidades de manejo, se han definido medidas de mitigación de posibles impactos a la actividad pesquera y distancias de seguridad con el fin de reducir la posible interferencia con los buques pesqueros en el área de influencia.

Resolución CFP 3/2019 - Épocas de prohibición y delimitación de pesca de vieira

La Resolución 3/2019 establece las coordenadas y la temporada en la que se prohíbe la práctica de la pesca de vieira.

Resolución CFP 10/2019 – Captura máxima permisible de la vieira patagónica

La Resolución 10/2019 establece una nueva Captura Máxima Permisible de Vieira Patagónica entera y de tamaño comercial y se detallan las áreas en las que se puede realizar la pesca, denominadas Unidades de Manejo.

Equinor velará porque no se realicen actividades de pesca en ninguna de las embarcaciones que serán contratadas por el Proyecto, en estricto cumplimiento de las normas pertinentes y aplicables en territorio argentino. Como se mencionó anteriormente, las medidas de mitigación relacionadas con posibles interferencias a las actividades pesqueras se desarrollan en el plan de manejo. Autoridad competente: CFP.

Resolución CFP 6/2017 - Áreas de veda para la conservación del abadejo

Mediante esta Resolución 6 del Consejo Federal de Pesca (del 5 de abril de 2017), se establecieron áreas de veda en los llamados "pozos de abadejo" con el fin de evitar la pesca dirigida de esta especie (*Genypterus blacodes*) en las áreas donde el recurso es altamente vulnerable debido a su estado de agregación. Cabe señalar que estas áreas han sido mapeadas en este estudio y que ninguna se superpone con el área de influencia del Proyecto.

Resolución CFP 2/2022

Establece la CMP para la vieira patagónica (*Zygochlamys patagonica*) entera y de talla comercial, para para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022.

Resolución CFP 19/2022

Establece la Captura Máxima Permitida ("CMP") para el año 2022 de Merluza común (*Merluccius hubbsi*), efectivo Norte del paralelo 41° S; (ii) Merluza común (*Merluccius hubbsi*), efectivo Sur del paralelo 41° S; (iii) Merluza de cola (*Macrurus magellanicus*); (iv) polaca (*Micromesistius australis*); (v) Merluza negra (*Dissostichus eleginoides*); y (vi) Merluza austral (*Merluccius australis*).

Normas nacionales

Ley 27.037 - Creación del sistema nacional de áreas marinas protegidas

La Ley 27.037 y su Decreto 402/2017, crea el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas, tomando en consideración los espacios marítimos establecidos en la Ley 23.968 (Artículos 3, 4, 5 y 6), con el objetivo de proteger y conservar los espacios marinos representativos, espacios de hábitats y ecosistemas. Cabe aclarar que dicha ley no es aplicable en áreas marítimas de jurisdicción provincial con excepción de áreas cuya jurisdicción esté previamente asignada al Estado nacional, y en parques marinos interjurisdiccionales (creados por las Leyes 26.446, 26.817 y 26.818), ubicado cerca de las provincias de Santa Cruz y Chubut.

Fuera de la jurisdicción provincial, en agosto de 2013 la primera área marina protegida (Área Marina Protegida Namuncurá – Banco Burdwood o AMPNBB) fue declarada por Ley 26.875, ubicada lejos del bloque CAN_100. Posteriormente, en 2018 se promulgó la Ley 27.490, que creó el Área Marina Protegida "Namuncurá - Banco Burdwood II", conformada por las categorías estrictas de manejo de reserva marina nacional y reserva marina nacional. Y también creó el Área Marina Protegida "Yaganés", que consta de las categorías de manejo de Reserva Nacional Marina Estricta, Parque Nacional Marino y Reserva Nacional Marina (también fuera de CAN_100).

Según el Artículo 2 "se consideran áreas marinas protegidas los espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluyendo el subsuelo, el fondo marino y columnas marinas asociadas, que por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una protección especial para el uso, educación y disfrute de las generaciones presentes y futuras".

El Artículo 5 define que las áreas marinas protegidas deben establecerse bajo las siguientes categorías, cada una de las cuales incluye ciertas prohibiciones:

- Reserva Nacional Marina Estricta: Zona de máxima protección permanente o temporal. Se prohíbe cualquier tipo de actividad de prospección, exploración y extracción en el lecho marino y subsuelo;
- Parque Nacional Marino: Se prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva en el lecho marino y el subsuelo;
- Monumento Nacional Marino: Se prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva en el lecho marino y el subsuelo;
- Reserva Nacional Marina para el Manejo de Hábitats / Especies: Se prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva en el lecho marino y el subsuelo;
- Reserva Nacional Marina: Se prohíbe cualquier tipo de actividad extractiva insostenible que genere impactos irreversibles en los ecosistemas y afecte los objetivos de conservación del área.

En relación con el Proyecto de perforación de Equinor, todas las áreas marinas protegidas han sido identificadas y mapeadas para el EsIA. Cabe señalar que el área operativa no se superpone con ninguna de ellas.

Ley 22.351 - Ley de Parques Nacionales

La Ley 22.351 de Parques Nacionales establece que "las áreas del territorio de la República podrán ser declaradas Parque Nacional, Monumento Natural o Reserva Nacional, que por su extraordinaria belleza o riqueza en flora y fauna nativa o por un interés científico específico, deben ser protegidas y preservadas para la investigación científica, educación y disfrute de las generaciones presentes y futuras, de acuerdo con los requisitos de Seguridad Nacional. En cada caso, la declaración se hará por ley "(Artículo 1).

También establece que la creación de nuevos Parques Nacionales, Monumentos Naturales o Reservas Nacionales, en el territorio de una provincia, solo podrá disponerse luego de la transferencia del dominio y jurisdicción sobre el área respectiva al Estado Nacional (Artículo 3).

La autoridad competente del régimen actual es la Administración de Parques Nacionales (Artículo 14).

En términos del Proyecto, los parques nacionales y otros tipos de categorías de conservación han sido mapeados para el área de estudio en la línea de base.

3.5 Marco General para las Actividades de Petróleo y Gas

3.5.1 Ley 17.319 - Ley Federal de Hidrocarburos

La Ley Federal de Hidrocarburos N° 17.319, modificada por las Leyes 26.197, 26741 y 27.007 regula la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos de petróleo y gas y la autoridad competente es la Secretaría de Energía. Establece que los yacimientos de hidrocarburos presentes en el territorio argentino o su plataforma continental pertenecen a los estados nacionales o provinciales, según la jurisdicción donde se ubiquen.

Los recursos de petróleo y gas presentes en áreas comprendidas entre las doce (12) millas náuticas medidas desde la línea de costa (líneas de base establecidas por la Ley 23.968) y el límite exterior de la plataforma continental pertenecen al Estado Nacional; y, por tanto, están sujetos al marco normativo nacional aplicable al sector, tal es el caso del Proyecto Argerich -1.

La Ley de Hidrocarburos establece, entre otras cuestiones, que:

- El Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar permisos de exploración y concesiones temporales de explotación y transporte de hidrocarburos.
- El permiso de exploración otorga el derecho exclusivo para realizar todas las tareas requeridas para la búsqueda de recursos de petróleo y gas, dentro del perímetro y durante el periodo definido por el permiso.

Otras normas principales para la actividad de petróleo y gas en alta mar incluyen:

Ley 26.659: Establece requisitos para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. Establece una serie de sanciones por aplicar a aquellas empresas involucradas en la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de Argentina sin autorización del Gobierno Argentino.

3.5.2 Abandono de pozos de hidrocarburos

La resolución SETyC 5/1996, determina las normas y procedimientos para el adecuado abandono de pozos hidrocarburíferos, disponiendo: i) diferentes categorías de pozos según su ubicación, su estado y su nivel de prioridad, ii) plazos de abandono, y iii) diferentes recomendaciones técnicas para el abandono, según se trate de abandono temporario o definitivo de la instalación. Conforme lo dispone la resolución mencionada, las empresas permisionarias o concesionarias deben presentar tanto el cronograma anual de actividades de abandono de pozos, como también el informe final de las actividades llevadas a cabo durante el año calendario precedente, antes del treinta y uno de enero de cada año.

3.5.3 Protección del medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos

La Resolución 105/1992 de la Secretaría de Energía establece normas y procedimientos basadas en estudios y recomendaciones del entonces Instituto Argentino del Petróleo para proteger al medio ambiente, e incorpora el Estudio de Impacto Ambiental como instrumento de gestión ambiental aplicable a la actividad hidrocarburífera en sus etapas de exploración y explotación, tanto en áreas continentales como marítimas.

La resolución mencionada es aplicable a empresas concesionarias, permisionarias y operadoras, dispone tanto la obligación de presentar ante la SE estudios de evaluación ambiental previos para las etapas de exploración y explotación, como la exigencia de presentar monitoreos de obras y tareas. También establece lineamientos y buenas prácticas ambientales, por ejemplo, en lo relacionado con:

- i) medidas de protección a las fuentes de provisión de agua para el desarrollo de tareas de exploración,
- ii) manejo de los desechos de equipos y motores durante la operación, y
- iii) métodos de confinamiento de agua de producción, entre otros temas.

Estas normas serán de aplicación obligatoria para toda Empresa, concesionarios, permisionarios, operadores, cuya actividad se encuentre sujeta a jurisdicción nacional y tenga a su cargo la exploración y explotación de hidrocarburos o la realización de proyectos y/o ejecución de obras en relación con dicha exploración o explotación.

3.5.4 Guías y recomendaciones para la ejecución de los Estudios Ambientales y Monitoreo de Obras y Tareas

La Resolución 252/1993 de la Secretaría de Energía aprobaba las guías y recomendaciones para la ejecución de los Estudios Ambientales y Monitoreo de Obras y Tareas exigidos por la Resolución N° 105/1992.

La resolución mencionada fue posteriormente reemplazada por lo dispuesto en la Resolución N° 25/2004 que aprobó las “Normas para la Presentación de los Estudios Ambientales correspondientes a los Permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos”.

3.5.5 Asuntos de jurisdicción y competencia

3.5.5.1 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención de Montego Bay)

La Ley 24.543 aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convenio de Montego Bay, Jamaica), que establece el marco normativo del derecho internacional del mar desde 1982.

La mencionada Convención define, entre otros, los conceptos de mar territorial, zona contigua, ZEE y plataforma continental. Todo el Proyecto se ubicará en la jurisdicción nacional, en la ZEE.

3.5.5.2 Ley 17.094 - Mar Territorial

La Ley 17.094 establece en su Artículo 1 que *“la soberanía de la Nación Argentina se extiende hasta el mar adyacente a su territorio hasta una distancia de doscientas millas náuticas, medidas desde la línea de las mareas más bajas, excepto en los casos de los Golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, en los que se medirán desde la línea que une sus cabos”*.

Por su parte, el Artículo 2 de dicho reglamento, agrega que *“La soberanía de la Nación Argentina se extiende también al lecho marino y al subsuelo de las áreas submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de doscientos metros o más allá de este límite, en la medida en que la profundidad de las aguas suprayacentes permite la explotación de los recursos naturales de dichas áreas”*.

En cuanto a jurisdicción, el Proyecto de Equinor se ubicará en la ZEE, en territorio nacional.

3.5.5.3 Ley 23.968 - Ley de espacios marítimos

De acuerdo con las directrices de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Ley 17.094, antes mencionadas, las líneas de base de la República Argentina están definidas en el Anexo I de la Ley 23.968 de Espacios Marítimos; que en su Artículo 1 también establece que “las líneas que unen los extremos que forman las desembocaduras de los Golfos San Matías, Nuevo y San Jorge se incluyen en las líneas de base, según lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 17.094...”.

El Artículo 2, por su parte, establece que *“las aguas ubicadas dentro de las líneas de base [...] forman parte de las aguas internas de la República Argentina”*.

La ley de referencia define en su Artículo 3 el mar territorial argentino como aquel que *“se extiende hasta una distancia de 12 (doce) millas náuticas desde las líneas de base establecidas en el Artículo 1 de esta ley. La Nación Argentina posee y ejerce plena soberanía sobre el mar territorial, así como sobre el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo de dicho mar”*.

Por su parte, los Artículos 4, 5 y 6 definen los conceptos de “zona contigua”, “zona económica exclusiva” y “plataforma continental”.

La zona contigua *“se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 24 (veinticuatro) millas náuticas medidas desde las líneas de base establecidas en el Artículo 1 de esta ley. La Nación Argentina, en el ejercicio de su poder jurisdiccional, podrá en este ámbito prevenir y sancionar las infracciones a sus leyes y reglamentos en materia fiscal, sanitaria, aduanera y migratoria, que se cometan en su territorio o en su mar territorial”* (Artículo 4).

La zona económica exclusiva argentina es aquella que *“se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 (doscientas) millas náuticas desde las líneas de base establecidas en el Artículo 1 de esta ley. En la zona económica exclusiva, la Nación Argentina ejerce derechos soberanos para fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho marino, y respecto de otras actividades, con miras a la exploración y explotación económica del área, por ejemplo, la producción de energía derivada del agua, corrientes y vientos. La normativa nacional sobre conservación de recursos se aplicará más allá de las 200 (doscientas) millas náuticas, sobre especies de carácter migratorio o sobre aquellas que intervengan en la cadena trófica de especies de la zona económica exclusiva argentina”* (Artículo 5). Es el caso de CAN_100, que se encuentra a más de 12 nmi, pero dentro de 200 nmi.

Finalmente, se determina que *“la plataforma continental sobre la que ejerce soberanía la Nación Argentina, comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y en toda la extensión natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o hasta una distancia de 200 (doscientas) millas náuticas medidas desde las líneas de base establecidas en el Artículo 1 de esta ley, en los casos en que el borde exterior no alcance esa distancia”*.

El Proyecto se ubica en alta mar de Argentina en el bloque CAN_100 de la Cuenca del Norte de Argentina.

3.5.5.4 Ley 27.557 - Ley de espacios marítimos, Modificación Ley 23.968

Ley 27.557 es complementaria a la Ley 23.968 que regula los espacios marítimos según la CONVEMAR y establece el límite exterior de la Plataforma Continental Extendida al consignar los puntos que la forman.

3.5.5.5 Ley 24.093 - Actividades portuarias.

La Ley 24.093 regula los aspectos vinculados a la habilitación, administración y operación de los puertos estatales y particulares existentes o a crearse en el territorio de la República.

3.6 Marco Jurídico relacionado con el Patrimonio Cultural

La principal ley que protege el patrimonio cultural en Argentina es la Ley 25.743, "Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico" (2003), reglamentada por el Decreto 1022/2004, "Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico" (2004). El objetivo de la ley es "la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el uso científico y cultural del mismo" (Artículo 1). La ley define el patrimonio arqueológico como "bienes muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que pueden brindar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde la época precolombina hasta tiempos históricos recientes y define el patrimonio paleontológico como "los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y cualquier concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o ubicados en el subsuelo o aguas jurisdiccionales" (Artículo 2). El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) es el encargado de proteger el patrimonio arqueológico y mantener el Registro Nacional de Sitios, Colecciones y Objetos Arqueológicos, y el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" se encarga de proteger el patrimonio paleontológico y mantener el Registro Nacional de Sitios, Colecciones y Restos Paleontológicos.

Dado que el Proyecto se realiza en alta mar, las leyes que protegen el patrimonio cultural subacuático son las más relevantes. Si bien Argentina no cuenta con una ley específica para el patrimonio cultural subacuático, la Ley 25.743 lo protege. Además, Argentina ha ratificado varios tratados internacionales que protegen el patrimonio cultural subacuático, entre ellos la "Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", cuyos artículos 149 y 303 exigen la protección del patrimonio cultural subacuático. Argentina también es signataria de la "Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático" de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene como objetivo proteger "todo rastro de existencia humana que tenga un carácter cultural, histórico o arqueológico, que ha estado bajo el agua, parcial o totalmente, periódica o continuamente, durante al menos 100 años" (Artículo 1). El Programa de Arqueología Subacuática de INAPL (PROAS) es la autoridad designada para ubicar, documentar e investigar sitios arqueológicos e históricos sumergidos en todo el país.

3.7 Marco Jurídico relacionado con la Salud y la Seguridad

3.7.1 Salud y seguridad

3.7.1.1 Normas nacionales

Ley 19.587 y Decreto Reglamentario 351/1979 - Ley de seguridad e higiene en el trabajo

De acuerdo con el Artículo 8 de la Ley 19.587, es obligación de todo empleador adoptar e implementar medidas adecuadas de salud y seguridad para proteger la vida e integridad de los trabajadores, especialmente en relación con:

- La construcción, adecuación, instalación y equipamiento de edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas;
- La colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinaria y de todo tipo de instalaciones, con los dispositivos de seguridad y salud que aconseje la mejor técnica;
- El suministro y mantenimiento de equipos de protección personal; y,
- Las operaciones y procesos de trabajo.

Los empleadores también están obligados, entre otras cosas, a:

- Mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento, la maquinaria, instalaciones y útiles de trabajo;
- Mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento y poner a prueba las instalaciones eléctricas y servicios de agua potable;
- Eliminar, aislar o reducir ruidos y/o vibraciones nocivas para la salud de los trabajadores;
- Depositar sustancias peligrosas con la consiguiente salvaguarda y en condiciones seguras (especialmente teniendo en cuenta los requisitos contenidos en los Artículos 145 a 149 del Decreto 351/1979 y Resolución 38/1996);
- Implementar las medidas requeridas para la protección contra incendios (Artículos 162 y siguientes);
- Colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de seguridad e higiene o adviertan de peligros en maquinaria e instalaciones;
- Promover la formación del personal en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en relación con la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas (Artículo 9).

El Decreto 351/1979, que reglamenta la Ley 19.587, establece requisitos sobre los siguientes aspectos, los cuales deben ser cumplidos en todas las etapas del Proyecto, entre otros:

- Suministro de agua potable;
- Condiciones de salud en los ambientes de trabajo: carga térmica, contaminación ambiental, radiación, ventilación, iluminación y color, ruido y vibraciones, instalaciones eléctricas, máquinas y herramientas, dispositivos sometidos a presión interna, trabajos con riesgos especiales, protección contra incendios;
- Protección personal del trabajador: equipos y elementos de protección personal.

El Decreto 1338/1996, por su parte, deroga el Título del Decreto 351/1979 referente a los Servicios de Medicina y Salud y Seguridad en el Trabajo y aprueba nuevas disposiciones al respecto. Así, el Artículo 3 del citado Decreto establece que “los establecimientos deberán contar, con carácter interno o externo según la voluntad del empleador, con Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, los que tendrán como objetivo fundamental prevenir, en sus respectivas áreas, todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores, por las condiciones de su trabajo, creando las condiciones para que la salud y la seguridad sean una responsabilidad del conjunto de la organización”. Estos servicios deben estar a cargo de los graduados universitarios.

La autoridad competente es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En este Proyecto, Equinor velará por el cumplimiento de la normativa antes mencionada sobre las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Las embarcaciones que serán contratadas por Equinor para el Proyecto contarán con personal especializado en Seguridad y Salud para controlar y verificar que se estén cumpliendo los puntos señalados en esta ley.

Ley 24.557 y Decreto Reglamentario 170/96 - Riesgos Laborales

La Ley 24.557 de Riesgos Laborales, el Decreto Reglamentario 170/1996 y otras normas complementarias, regulan las materias relativas a la prevención de riesgos y la reparación de daños derivados del trabajo, instituyendo un seguro obligatorio para el trabajador a través de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART).

Los empleadores deben estar afiliados a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) a la que deben declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantilla.

Además, los empleadores están obligados a, entre otros asuntos:

- Realizar los reconocimientos médicos a los trabajadores requeridos por la normativa vigente.

- Desarrollar un Plan de Mejoramiento en los términos de la Ley 24.557 y el Decreto 170/1996, brindar a las aseguradoras la información necesaria para evaluarlo, desarrollarlo, controlarlo y darlo a conocer a los trabajadores.
- Informar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos a la ART y SRT.
- Cumplir con las normas de salud y seguridad.
- Mantener un registro de reclamaciones por establecimiento.
- Cumplir con el programa de formación acordado con la ART.
- Proporcionar una formación adecuada a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo.

La autoridad competente es la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Como se mencionó anteriormente, Equinor cumplirá con las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo, contratando las pólizas de seguro necesarias de acuerdo con la normativa aplicable.

3.7.2 Sustancias peligrosas

3.7.2.1 Normas nacionales

Ley 19.587, Decreto Reglamentario 351/1979 y normas complementarias - Salud y Seguridad en el trabajo

En cuanto al manejo de sustancias peligrosas, el Decreto 351/97, que reglamenta la Ley 19.587, establece que el almacenamiento, manejo o procesamiento de sustancias infecciosas o sustancias que sean capaces de producir polvos, gases o nieblas tóxicos o corrosivos y amenacen la salud o la vida de los trabajadores deben realizarse en lugares aislados, asignando personal capacitado y calificado para su manejo y adoptando las máximas medidas de seguridad (Conf. Artículo 145).

Los envases que contengan sustancias o elementos explosivos, corrosivos, tóxicos, infecciosos, irritantes o cualesquiera otros capaces de producir riesgos para los trabajadores serán seguros y deberán estar etiquetados de manera visible indicando su contenido, así como las precauciones para su uso y manipulación (Artículo 145).

La autoridad competente es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Las normas de seguridad y salud ocupacional son verificadas por la superintendencia de riesgos ocupacionales y subsidiariamente por las agencias de control de las jurisdicciones.

Resolución SRT 801/2015 – Sistema Globalmente Armonizado (SGA)

Esta resolución aprueba la implementación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS). Esta Resolución se basa en las disposiciones del "Libro Morado" de las Naciones Unidas.

Por lo tanto, el EMS es obligatorio para los empleadores en Argentina. Su aplicación está destinada al lugar de trabajo. Debería considerarse obligatorio para la correcta manipulación y gestión de todas las sustancias químicas a bordo de los buques.

Resolución 192/2019 – Registro de sustancias químicas presentes en el país y sus restricciones

A través de ella se crea la LISTA NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES, RESTRINGIDAS Y PROHIBIDAS en el ámbito de la DIRECCIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS de la SECRETARÍA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), que tendrá el objetivo de mantener un registro adecuado de todas las sustancias químicas presentes en nuestro país y las restricciones que las afectan, facilitando la

aplicación de la normativa nacional y el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos internacionalmente.

Dadas las particularidades del Proyecto, no se observan productos o sustancias sujetos a la normativa, por lo que no es de aplicación directa.

3.7.3 Almacenamiento de petróleo

3.7.3.1 Normas nacionales

Ley 13.660 y Decreto Reglamentario 10877/1960 Normas de seguridad en las instalaciones de preparación, transformación y almacenamiento de combustibles

La Ley 13.660 y su Decreto Reglamentario 10877/1960 y otras normas modificatorias y complementarias establecen las medidas de seguridad aplicables a las instalaciones de preparación, transformación y almacenamiento de combustibles minerales sólidos, líquidos y gaseosos. La autoridad competente es la Secretaría de Energía.

Estas normas, entre las que se encuentran la organización de defensas activas y pasivas en instalaciones planas o elevadas destinadas al almacenamiento de combustibles, deben ser tenidas en cuenta en todo momento para el suministro de equipos, maquinaria, generadores eléctricos, etc. Durante las diversas etapas del Proyecto, será necesario el uso de combustible líquido, el cual deberá ser almacenado cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas.

3.8 Marco Legal sobre el Área de Exploración/Explotación “CAN_100”

Mediante Resolución 196/2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía, se dio por terminado el convenio para la exploración y explotación del área “E-1” (que incluía CAN_100) suscrito en 2006 entre Energía Argentina S.A., YPF, Petrobras Argentina S.A. (actualmente Pampa Energía S.A.) y Petrouuguay S.A. En mayo de 2019, la Secretaría de Gobierno de Energía firmó un acuerdo con YPF (El Acuerdo de Reconversión) reemplazando el acuerdo anterior y otorgando un Permiso de Exploración a YPF en el área “CAN_100”, asumiendo compromisos de inversión en exploración como se describe en el Acuerdo de Reconversión.

En octubre de 2019, Equinor fue subcontratada en el bloque YPF CAN_100 y acordó hacerse cargo de la operación. En virtud de este acuerdo, Equinor adquiriría una participación del 50% en el área “CAN_100”, mientras que YPF posee el otro 50%.

En enero de 2021, Equinor e YPF firmaron un acuerdo con Shell para reducir conjuntamente las participaciones no operadas del 30% en el bloque CAN_100. Equinor e YPF mantienen una participación del 35% cada una y Shell adquirió una participación del 30%.

A través del expediente administrativo EX-2019.89665163- -APN-DGDOMEN#MHA, YPF respondió a la solicitud en el Artículo 5 de la Resolución 196/2019, que establece que “el titular del permiso debe realizar la medición del área y presentarla a la Secretaría Federal de Energía”. Para ello, YPF presentó un informe de medición del área, el cual fue registrado mediante Nota Administrativa PV-2019-89665332-APN-DGDOMEN#MHA.

Allí se indican las siguientes coordenadas:

COORDENADAS SEGÚN MENSURA SISTEMA POSGAR 07 PROYECCIÓN GAUSS KRÜGER FAJA 6		
V	Y (ESTE)	X (NORTE)
1	6716019.16	5630116.41
2	6716018.73	5552410.82
3	6667190.72	5552410.84
4	6668690.46	5442642.01
5	6640607.54	5442682.24
6	6640607.39	5458501.04
7	6588981.74	5458533.02
8	6588981.74	5483403.91
9	6571100.92	5483400.4
10	6571100.92	5528908.82
11	6606571.41	5528912.46
12	6606571.41	5557487.52
13	6620329.78	5557487.52
14	6620329.89	5614637.64
15	6667954.98	5614637.64
16	6667954.98	5629983.51

3.9 Estándares Internacionales

El objetivo de la presente sección es proporcionar un marco general sobre el cual operará el Proyecto de exploración, presentando las tendencias conocidas como buenas prácticas del sector Hidrocarburos. En los casos en que sea posible, se resumirán referencias específicas para los proyectos de perforación costa afuera y/o de pozo exploratorio.

3.9.1 Guías sobre Ambiente, Salud y Seguridad para el Desarrollo de Petróleo y Gas Costa afuera de la Corporación Financiera Internacional

Las Guías para Medio Ambiente, Salud y Seguridad (conocidas como MASS en español o EHS/HSE en inglés) son documentos técnicos publicados por la Corporación Financiera Internacional (más conocida como IFC por su sigla en inglés) en junio de 2015 que contienen buenas prácticas generales para la industria. Presentan lineamientos e indicadores de desempeño que pueden ser implementados en nuevas instalaciones o proyectos, adaptándolos a las circunstancias y tomando en cuenta la tecnología existente.

Para cada tipo de industria o sector en particular existen también las guías específicas que son complementarias a las generales. Si bien las mismas son de estricto cumplimiento en caso de que el Proyecto solicite financiamiento al Banco Mundial, pueden ser tenidas en consideración como un documento ejemplificante de Buenas Prácticas o estándares internacionales.

La IFC publicó las Guías de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (HSE) en 1998 y las Guías HSE para Desarrollos de Petróleo y Gas en 2007. Las Guías HSE son documentos de referencia técnica con ejemplos generales y específicos para cada industria de las Buenas Prácticas Internacionales Recomendadas para la Industria (GIIP por su sigla en inglés). La aplicabilidad de las Guías EHS se adapta a los peligros y riesgos establecidos para cada proyecto sobre la base de los resultados de una evaluación ambiental en las que se toman en cuenta las variables específicas del sitio, tales como el contexto del país anfitrión, la capacidad asimilativa del ambiente y otros factores del proyecto.

Para el Proyecto en cuestión, se considera relevante describir las Guías de Medio Ambiente, Salud y Seguridad para el Desarrollo Costa afuera de Petróleo y Gas, publicaciones que datan de junio de 2015.

Los siguientes problemas ambientales se deben considerar como parte de una evaluación integral y un programa de manejo que implique los riesgos específicos del Proyecto y los potenciales impactos. Los potenciales problemas ambientales asociados con los proyectos de desarrollo hidrocarburífero costa afuera incluyen los que se señalan a continuación:

- Emisiones de aire
- Descarga de aguas residuales
- Gestión de residuos sólidos y líquidos
- Generación de ruido (incluido ruido submarino)
- Derrames
- Eficiencia energética y conservación de recursos

Algunos de estos temas son aplicables a los proyectos de perforación de pozo exploratorio y productora y también toman en cuenta posibles impactos en tierra que pueden resultar de dichas actividades.

3.10 Estándares Corporativos

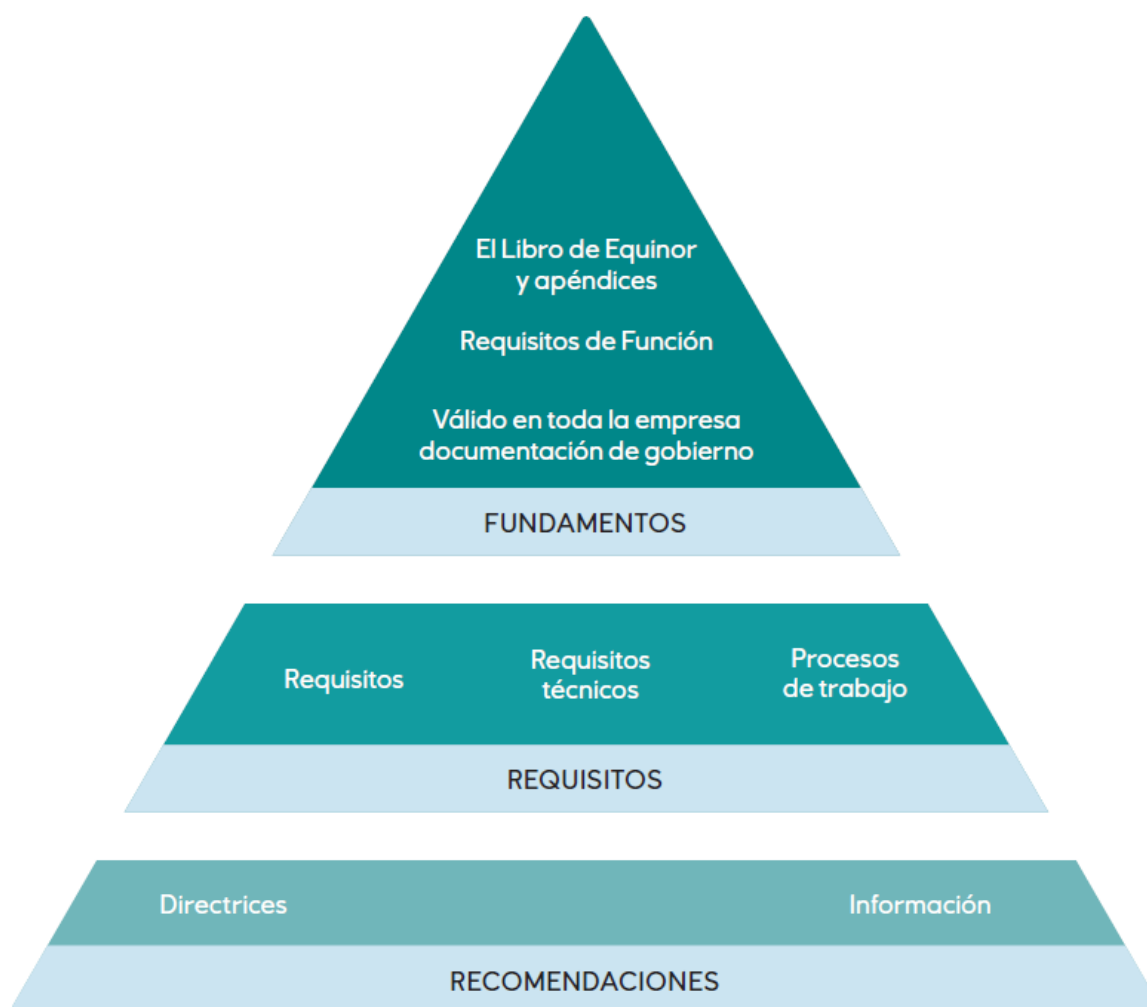
Como compañía, Equinor tiene un objetivo claro de desarrollo sostenible y se ha comprometido a minimizar impactos ambientales. Esta sección introduce la Política de Seguridad y Sostenibilidad y su Sistema de Gestión Ambiental.

3.10.1 Sistema de gestión ambiental de Equinor

El sistema de gestión ambiental de Equinor está estructurado en 3 niveles: (1) fundamentos, (2) requerimientos y (3) recomendaciones:

- Los fundamentos son regulaciones esenciales para la compañía y son válidas en toda ella. Describen qué desea alcanzar la compañía e incluyen valores, principios, compromisos y mandatos. Los fundamentos incluyen estándares desarrollados en el Libro de Equinor y los “requerimientos de función”. Los requerimientos de función de Equinor son normas esenciales para la compañía en cada uno de sus procesos y áreas de función. Son requerimientos comunes que aseguran que la compañía tiene un enfoque alineado con los riesgos de gestión y la complejidad de esta en todos sus negocios.
- Los requerimientos se usan para manejar los riesgos y proporcionar operaciones seguras y eficientes. Son establecidas a nivel de las áreas individuales de negocios o unidades geográficas por documentos más detallados que cumplen con los requerimientos corporativos, aunque se adaptan a las necesidades de cada área de negocios individual y cumplen con la legislación local. Los requerimientos se instituyen en diversos documentos de gestión y control de la organización de la compañía, procesos de trabajo, documentos de requerimientos de trabajo, documentos de requerimientos técnicos, documentos de sistemas y operación, documentos de control claves y documentos de plan de respuesta a emergencias.
- Las recomendaciones apoyan a las personas cuando efectúan tareas y permiten el cumplimiento con los fundamentos o requerimientos. Describen sugerencias o propuestas para el mejor curso de acción y se basan en el aprendizaje y experiencia colectivos de la compañía.

Figura 3-1: Jerarquía del sistema de gestión de Equinor



El sistema de gestión ambiental (EMS por su sigla en inglés) de Equinor es totalmente compatible con los estándares de gestión ambiental reconocidos, incluidos la norma ISO 14001.

El plan de manejo de Equinor abarca componentes específicos. Para los programas de perforación, este incluiría, aunque no en forma limitativa, políticas y procedimientos de prevención de la contaminación y planes para respuesta a emergencias, respuesta a derrames, gestión de desechos y monitoreo ambiental.

Cumplimiento significa seguir los requerimientos externos e internos, y lograr el desempeño necesario. El sistema de gestión se usa sistemáticamente en el trabajo diario. La capacitación en el uso de los procesos de trabajo es parte de este enfoque sistemático. Cuando se realiza una actividad específica, es preciso considerar los riesgos. Una evaluación de riesgos puede conducir a una necesidad de mejora o a evaluar una aplicación para la exoneración y/o equivalencia regulatoria de la documentación. También se requiere del liderazgo para lograr el cumplimiento. Esto incluye la comunicación del sistema de gestión, actuar como modelo de roles y ser coaching de la organización en el uso del sistema de gestión. Equinor prueba regularmente cuán bien está trabajando el Sistema de Gestión a través de su proceso de aseguramiento, lo cual incluye autoevaluaciones, verificaciones y auditorías.

3.10.2 El Libro de Equinor

La gobernanza corporativa de Equinor está delineada en el Libro de Equinor. El libro es el centro del Sistema de Gestión de Equinor. Describe los requerimientos más importantes para la compañía en su conjunto y define un marco común para la forma como trabaja Equinor. Establece normas para el comportamiento, el desempeño y el liderazgo. El Libro de Equinor tiene 2 secciones principales:

- “Quiénes somos” describe las bases para todo lo que Equinor hace e incluye su visión, valores y compromisos.
- “Cómo trabajamos” muestra la forma en que Equinor impulsa el desempeño y permite resultados rentables, seguros y sostenibles. Refleja la cultura colaboradora de Equinor y asegura cómo Equinor maneja los riesgos y ejecuta las tareas en forma segura y precisa, mientras sigue con el mejoramiento continuo a lo largo del trayecto.

3.10.3 Requerimientos de función

Como soporte al Libro de Equinor, los requerimientos de función especifican cómo se desarrollan sus negocios a través de un conjunto de estándares y define las actividades de gestión obligatorias. Los requerimientos de funciones de Equinor son normas fundamentales para la compañía y son válidas para esta en su totalidad, sin excepción.

El requerimiento de función de Sostenibilidad (FR-11) de Equinor es equivalente a una Política Ambiental definida de acuerdo con la norma ISO 14001. La función de sostenibilidad corporativa de Equinor establece la dirección estratégica sobre derechos humanos, medio ambiente y aspectos sociales. Esta función permite incluir en la estrategia de negocios de Equinor, el manejo de impactos, riesgos y desempeño relacionados con la sostenibilidad, dando apoyo al objetivo de Equinor de contribuir al Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU.

3.10.4 Requerimientos y recomendaciones

El Libro de Equinor y los requerimientos de funciones se apoyan en requerimientos y recomendaciones. Los requerimientos incluyen procesos de trabajo, requerimientos técnicos y operativos y procedimientos que definen cómo se cumplen los requerimientos corporativos, aunque adaptados a las necesidades de cada área de negocios individual y cumpliendo con la legislación local. Como ejemplos relevantes para la gestión del medio ambiente tenemos los requerimientos de residuos y los procesos de trabajo con manejo de sustancias químicas.

Las recomendaciones (guías y artículos de información) proporcionan lineamientos adicionales para ayudar a Equinor a entender cómo cumplir con los requerimientos en la forma más eficiente.

3.10.4.1 Estándar de requerimiento técnico TR1011 ‘Requerimientos ambientales para instalaciones costa afuera’

Los documentos que rigen Equinor estipulan requerimientos técnicos y profesionales que aplican a todos los proyectos. Entre estos están, por ejemplo, el requerimiento TR1011 “Estándar Ambiental Técnico para el Diseño, Modificaciones y Operación de Plantas Costa afuera”, el cual define un grupo de requerimientos ambientales técnicos para los desarrollos y operaciones costa afuera. Varios requerimientos estándar soportan la implementación de TR1011, entre ellos:

- Manejo energético
- Emisiones de aire
- Aguas residuales (agua de drenaje, agua de enfriamiento, agua de sentina, etc.)
- Fluidos y cortes de perforación
- Uso de sustancias químicas y aditivos

- Prevención de derrames
- Residuos

Los principales lineamientos de este documento incluyen lo siguiente:

- Se deben identificar y evaluar los conceptos y tecnologías alternativos. La selección de la tecnología se priorizará en el siguiente orden: prevenir, minimizar, mitigar y compensar.
- Mejores Tecnologías Disponibles (Best Available Techniques – BAT) constituye el principio primordial. Para el diseño y la operación de cada instalación se realizarán y documentarán las evaluaciones BAT, las cuales también deberán incluir estimados costo-beneficio.
- Se debe cumplir con las leyes y reglamentos nacionales y los objetivos corporativos.

3.10.5 Gestión de riesgos

La gestión de riesgos se integra en todos los procesos comerciales de Equinor alrededor del mundo. El enfoque para la gestión de riesgos está documentado en el estándar para gestión de riesgos (RM 100 Gestión de Riesgos). Los lineamientos y requerimientos técnicos que soportan este estándar incluyen los siguientes:

- GL0139 – Principios "As Low As Reasonably Practicable"- ALARP, ("tan bajo como sea razonablemente practicable", en español)
- GL0386 – Guía para impactos ambientales en proyectos
- GL0449 – Identificación y manejo de aspectos ambientales
- GL0498 – Guía para análisis de escenario de explosión (prevención de surgencia descontrolada del pozo) como aporte para análisis de riesgo ambiental

3.10.6 Monitoreo de desempeño

El monitoreo se efectúa para manejar riesgos e impulsar el desempeño y el aprendizaje. Este proceso asegura la calidad, efectividad y asegura el cumplimiento con el sistema de gestión a tiempo que sienta las bases para el mejoramiento.

El monitoreo es realizado por partes internas y externas. El alcance y la frecuencia del monitoreo interno depende de una evaluación de riesgos llevada a cabo por gerentes de línea, propietarios de proceso y funciones de personal corporativo. El monitoreo interno consiste en 3 categorías principales: seguimiento, verificación y auditoría interna.

3.10.7 Política de salud, seguridad y medio ambiente

Las políticas de Seguridad y Sostenibilidad de Equinor forman los cimientos de cómo Equinor conduce sus negocios. Equinor garantiza operaciones seguras que protegen a las personas, el medio ambiente, las comunidades y los activos materiales. Además, hace uso de los recursos naturales eficientemente y provee de energía, lo que apoya el desarrollo sostenible. Equinor cree que los accidentes pueden prevenirse.

Equinor está comprometido con:

- Integrar las políticas HSE⁴ en cómo realizan sus negocios.
- Mejorar el desempeño HSE en todas sus actividades.
- Contribuir al desarrollo de los sistemas y tecnología de energía sostenible.
- Demostrar la importancia de los principios HSE a través de un liderazgo y comportamiento prácticos.

⁴ Salud, Seguridad y Medio ambiente por sus siglas en inglés

- Tener una actitud abierta en todos los temas de HSE y participación activa con los actores.

Cómo trabaja Equinor:

- Toma la responsabilidad por su propia seguridad física y personal y la de otros.
- Trabaja sistemáticamente para comprender y manejar el riesgo.
- Proporciona a los empleados los recursos, equipos y capacitación necesarios de acuerdo con las responsabilidades designadas.
- Coopera con los contratistas y proveedores sobre la base del respeto mutuo.
- Detiene las operaciones y acciones inseguras.
- Busca un ambiente de trabajo seguro y atractivo caracterizado por el respeto, confianza y cooperación.
- Monitorea la salud de las personas en los riesgos relacionados con el trabajo.
- Establece procesos de trabajo, objetivos e indicadores de desempeño para controlarlos, medirlos y mejorarlos.
- Efectúa procesos de mejora de HSE basados en estudios y evaluaciones de riesgo.
- Construye instalaciones/plantas sólidas y los mantiene libres de accidentes.
- Si ocurren accidentes, la preparación para emergencias de Equinor debe hacer el máximo esfuerzo para reducir lesiones y pérdidas. Salvar vidas es la máxima prioridad.

3.10.8 Código de conducta

Equinor mantiene un Código de Conducta que establece sus expectativas, compromisos y requerimientos de conducta ética. Este código se aplica a todo el personal y contratistas de Equinor, y cubre también, en forma integral, los tópicos clave que activan las operaciones, tales como responsabilidades para los líderes, ética y cumplimiento de otros temas como seguridad física y personal, anticorrupción, etc.

En el contexto de la perforación del Proyecto Argerich -1 en CAN_100 que se llevará a cabo, es importante remarcar algunas secciones del Código de Conducta de Equinor. En primer lugar, dada la cantidad de contratistas que requerirá el Proyecto de perforación (es decir, consultores, contratistas de residuos, observadores de mamíferos marinos, etc.) y las sociedades que Equinor mantiene con Shell y YPF para el área de la concesión CAN_100, habrá que aplicar la sección “Socios comerciales y proveedores”, la que manifiesta que Equinor trabaja con otros que comparten la ética y cumplimiento respecto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y se adhieren a los estándares éticos. Además, Equinor cuenta con un procedimiento para la debida diligencia de la integridad y la debida diligencia de los derechos humanos que deben establecerse antes de cualquier relación comercial.

Por otro lado, un tópico clave que se ha desarrollado en el Código de Conducta es “Trabajando con nuestras comunidades” que es considerado uno de los temas más importantes en el proceso ambiental y social del Proyecto de perforación Argerich -1, regido por la Resolución Conjunta N°3. Este Proyecto se relaciona también con los procesos de participación temprana, la participación de los actores durante toda la vida del Proyecto, el desarrollo de audiencias públicas y la elaboración de los programas de gestión específicos (p. ej., Mecanismo de Peticiones, Quejas y Reclamos). Siguiendo esta línea, Equinor entiende que el compromiso con la comunidad es una de las prioridades más altas para las operaciones con el objetivo de proporcionar beneficios mutuos para las comunidades locales. Su contribución a las comunidades puede incluir empleo local directo e indirecto, adquisición local de bienes y servicios, desarrollo de infraestructura local y construcción de capacidades, así como inversiones sociales. Además, el Código de Conducta indica expresamente que todos los empleados y contratistas de Equinor deben considerar y abarcar el impacto de las actividades en las comunidades

locales, incluyendo la relación con la tierra, el agua y los recursos naturales. Esta es una sección dedicada a la Comunicación Pública y asimismo las reglas que guían la operación de Equinor en relación con la protección ambiental. Uno de los objetivos establecidos, que guarda relación con la navegación en naves, es el límite de las emisiones de gases de efecto invernadero.

3.11 Marco institucional

Para el proyecto de perforación de pozo exploratorio a realizarse en CAN_100, se han identificado las siguientes agencias a nivel nacional que intervendrán en el procedimiento técnico y administrativo de los permisos ambientales. El mapa del Estado a la fecha de este informe ha sido tomado como referencia.

La lista presentada a continuación no debería considerarse exclusiva y se basa principalmente en las agencias estatales nacionales involucradas en el permiso ambiental necesario para operar el procedimiento de estudio de impacto ambiental provisto en la Resolución Conjunta No. 3/2019 para actividades relacionadas con la exploración de perforación costa afuera.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación
 - Dirección Nacional de Evaluación Ambiental
 - Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental. Es el principal brazo ejecutor de la Resolución Conjunta N°3/2019, bajo la cual, en términos de procedimiento, se enmarca el proceso de EsIA de perforación de exploración costa afuera. Si bien el proceso y la presentación del EsIA se inician en esta cartera, la misma está habilitada a consultar a otros organismos del Estado Nacional y otras áreas dentro del Ministerio u otros lugares. Esto ocurre, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Biodiversidad y la Dirección de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, que contribuyen en la elaboración de las especificaciones técnicas para el Proyecto.
 - Resolución 206/2016. Este instrumento normativo designa al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación como el área competente para verificar la consecución del Artículo 22 de la Ley General del Ambiente No. 25.675, incluido el registro de garantías ambientales financieras a que se hace referencia en el mencionado artículo, que corresponde al Proyecto.
 - Resolución 1135/2015. El documento contiene el Reglamento de Investigaciones por Presuntas Infracciones a Normas de las cuales la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura del Gabinete de Ministros es autoridad. El objetivo es sentar las bases para establecer el debido proceso y la determinación de las multas, responsable y sanciones aplicables. Por lo tanto, en caso de ocurrencia, el Proyecto estará sujeto a este reglamento.
 - Secretaría de Fiscalización y Control Ambiental
- Ministerio de Economía de la Nación
 - Secretaría de Energía
 - Subsecretaría de Hidrocarburos. Organismo obligado de consulta que forma parte del proceso de aprobación.
 - Dirección Nacional de Exploración y Producción, área competente para la ejecución de la Resolución Conjunta 03/2019, con competencia sobre áreas de exploración y/o producción costa afuera en jurisdicción.

- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
 - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
 - Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA). A través de esta entidad se logra la emisión de la opinión técnica que desarrolla el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El INIDEP no depende directamente de la Subsecretaría, pero funciona como un instituto asesor de la misma y del Consejo Federal Pesquero (CFP) y brinda su experiencia al procedimiento del EIA. Su informe técnico se incluye en la intervención que la SSPyA elabora a través del proceso.
- Ministerio de Seguridad de Argentina.
 - Prefectura Naval Argentina. Si bien es un organismo al servicio del Ministerio, tiene un papel importante en el Proyecto, en particular, en lo que atañe a estándares de seguridad, requerimientos marítimos y de prevención de la contaminación, y planes de contingencia ante emergencias. Se considera que, una vez aprobado el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, el proponente prestará cumplimiento a todas las obligaciones y requerimientos legales que la Prefectura Naval Argentina le imponga.
- Ministerio de Defensa de la Nación

Este organismo, a través del Departamento de Propagación Acústica de la Dirección General de Investigación de la Armada, da respuesta a las consultas sobre los aspectos hidroacústicos vinculados al Proyecto.

3.12 Principios de adhesión voluntaria

La siguiente es una breve descripción de las normas y guías internacionales a las que el Promotor se adherirá y con los que el Proyecto cumplirá durante su desarrollo.

3.12.1 Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y los Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos endosó los Principios Rectores sobre Empresas y los Derechos Humanos (UNGPS, por sus siglas en inglés), en su Resolución 17/4 del 16 de junio de 2011. Los UNGPS se basan en el reconocimiento de los siguientes puntos.

- Las obligaciones de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales.
- El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que realizan funciones especializadas necesarias para cumplir con las leyes aplicables y respetar los derechos humanos.
- La necesidad de los derechos y obligaciones de coincidir con soluciones apropiadas y efectivas en caso de infracciones.
- Los Principios deben ser manejados en forma holística, aplicados tanto individual como colectivamente. El objetivo es mejorar las normas y prácticas con respecto a las empresas y derechos humanos a fin de conseguir resultados que también contribuyan a un ambiente y prácticas empresariales sostenibles con respecto a los negocios y los derechos humanos, aportando así a una globalización sostenible socialmente (Nations, 2011).
- Equinor se compromete a respetar y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales cumpliendo con las leyes aplicables del Gobierno de Argentina implementando políticas y guías a los cuales se adhieren sus empleados, subcontratistas y contratistas, así como la forma en que Equinor se compromete con las comunidades.

3.12.2 Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos

Los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR, por sus siglas en inglés), promueven un grupo de principios que proporcionan lineamientos a las compañías sobre cómo llevar a cabo sus operaciones de seguridad con respeto a los derechos humanos. En el año 2000, compañías, gobiernos y ONG entablaron un diálogo para abordar los abusos y violaciones de derechos humanos vinculados a la seguridad. En un esfuerzo colectivo, se desarrollaron los Principios Voluntarios y posteriormente se convirtieron en un estándar reconocido internacionalmente. La Iniciativa de Principios Voluntarios fomenta los Principios y su implementación por parte de los miembros desde 3 pilares: corporativo, gubernamental y de ONG. (The Voluntary Principles on Security and Human Rights, 2021).

Equinor tiene como objetivo generar un ambiente de trabajo digno y seguro, apoyado en los VPSHR para asegurarse de que los derechos humanos no están siendo violados en ningún momento.

3.12.3 Pacto Mundial de las Naciones Unidas

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, por sus siglas en inglés) es una importante iniciativa de sostenibilidad corporativa apoyada por la Organización de las Naciones Unidas. Tiene una posición única para fomentar la colaboración a fin de lograr y ampliar soluciones para enfrentar los desafíos globales. El Pacto Global tuvo su base en la visión del ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, quien, en el Foro Económico Mundial de 1999, convocó a los líderes empresariales a ser socios de la ONU para crear un impacto global. El Pacto Global juega un papel crucial en el fortalecimiento de la colaboración entre empresas y las Naciones Unidas.

Los 10 principios del Pacto Global de las Naciones Unidas son los siguientes:

Derechos Humanos

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Normas Laborales

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Medio Ambiente

Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque preventivo ante los desafíos ambientales.

Principio 8: Las empresas deben emprender iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Anticorrupción

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

El Proyecto de Equinor está comprometido con el cumplimiento de los principios del UNGC de modo que el desarrollo sea integral y sustentable, a través de varios procedimientos, guías, etc., que determinen los valores que lo rijan y su forma de colaboración sostenible con el mundo.

3.12.4 Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, a fines de la Primera Guerra Mundial, y reflejaba la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz universal y permanente. Sus principales objetivos son promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo en el tratamiento de los problemas laborales.

El Proyecto de Equinor busca respetar los derechos laborales del personal directo e indirecto que participe en el desarrollo de las actividades del Proyecto, cumpliendo así con los objetivos y principios de la OIT. Se cumplirá con la normativa establecida por el gobierno de Argentina sobre temas laborales y se verificará que los contratistas y subcontratistas no contraten trabajo forzado, menores de edad o contemplen prácticas discriminatorias en sus compañías.

3.12.5 Asociación Global para los Aspectos Ambientales y Sociales de la Industria del Gas y el Petróleo

IPIECA (por sus siglas en inglés) es una asociación sin fines de lucro que brinda un foro para incentivar la mejora continua en el desarrollo de la industria. IPIECA es la única asociación internacional involucrada tanto en los componentes upstream (corriente arriba por su traducción en español) como downstream (corriente abajo por su traducción en español) de la industria hidrocarburífera; también es el principal canal de comunicación de la industria con la Organización de Naciones Unidas (IPIECA, 2019⁵).

Equinor se compromete a integrar la sostenibilidad de los océanos en el desarrollo de sus actividades y su estrategia comercial general, lo que está en conformidad con los principios establecidos en la Guía Práctica para el Sector Hidrocarburos.

3.12.6 Acuerdo de París

El principal objetivo del Acuerdo de París es evitar que el incremento de la temperatura promedio global de la Tierra exceda los 2°C con respecto a los niveles preindustriales y busca, asimismo, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1.5°C (Acuerdo de París, 2015⁶).

3.12.7 Plataforma empresarial de acción oceánica sostenible de Naciones Unidas

La Plataforma Empresarial de Acción Oceánica Sostenible de la ONU busca comprometer al mundo empresarial y académico, el sistema de la ONU y de los gobiernos, para determinar cómo pueden avanzar las industrias oceánicas hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (SDG, Nations, Sustainable Ocean Business Action Platform⁷).

Equinor se compromete a integrar la sostenibilidad de los océanos en el desarrollo de sus actividades y su estrategia comercial general, lo que está en conformidad con los principios establecidos en la Guía Práctica para el Sector Hidrocarburos, a fin de realizar las actividades con el menor impacto posible sobre el medio ambiente.

⁵ Disponible en: <https://www.ipieca.org/es/acerca-de-ipeca/>

⁶ Acuerdo de París (2015). Reporte de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (21ª Conferencia, 2015: París).

⁷ Disponible en: <https://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/ocean>

3.12.8 Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030

Mediante la Resolución N°1036/2021 de la Secretaría de Energía del 1 de noviembre de 2021 se aprueban los “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030” donde se formulan objetivos y características de la matriz energética Argentina y los principales lineamientos de acción.

La Resolución, a través de su Anexo, incorpora el Programa de Transición Energética, mediante el cual se establece una serie de objetivos generales y lineamientos estratégicos para el 2030 en materia energética

3.13 Certificaciones de procedimientos y certificaciones de capacitación personal

Equinor implementa un Procedimiento que establece las líneas de capacitación y calificación con las que el personal debe cumplir a fin de formar parte del grupo de trabajo del Proyecto; esto forma parte de su Sistema de Gestión.

Las siguientes capacitaciones son los requisitos mínimos con los que se debe cumplir:

- Capacitación inicial en bienestar del personal y protección del medio ambiente.
- Emergencias no operativas
- Rescate de personas en el agua (para todo el personal que trabaja o visita instalaciones costa afuera)
- Prácticas de Trabajo Seguro
- Respuesta a y control de emergencias
- Identificación y reporte de peligros y riesgos
- Autoridad de Detenimiento de Trabajo
- Reporte de incidentes
- Lucha contra incendios, apropiada para la instalación y de conformidad con la Evaluación de Riesgo de Incendios
- Operaciones Simultáneas
- Comunicación de peligros potenciales
- Protección Ambiental (gestión de residuos, efluentes y emisiones)
- La capacitación exigida a los empleados se basa en el tipo de trabajo que realizan y los riesgos asociados a estas actividades. Existen 4 categorías generales:
 - 1. Personal de perforación y pozos: trabaja en operaciones de campo a tiempo completo.
 - 2. Personal de operaciones y mantenimiento: trabaja de operaciones de campo a tiempo completo.
 - 3. Personal de oficina: visita instalaciones de campo.
 - 4. Personal de oficina: no viaja a instalaciones costa afuera.

Los requisitos de capacitación específica e individual dependerán de los roles y responsabilidades de cada persona según sus actividades. Existe una matriz de capacitación en la que se muestran el entrenamiento de trabajo seguro, las regulaciones y las consideraciones ambientales costa afuera.

En caso de que se implementen nuevos procedimientos o los existentes sean modificados, se requiere nuevo entrenamiento. Si existen cambios en los cargos de los empleados, se deben realizar las capacitaciones correspondientes además de nuevos entrenamientos. Vale la pena mencionar que el personal puede requerir capacitación de acuerdo con las líneas de comunicación.

Los coordinadores de capacitación son responsables de la documentación de los cursos, materiales y registros de final de curso.

En caso de cambios en los procedimientos operativos, regulaciones o procesos, se realizan cambios al contexto del material de capacitación o la frecuencia de esta última. Los empleados que operan dicho equipo o trabajan en los procesos deben ser entrenados antes de la implementación correspondiente.

Todos los trabajadores deberán cumplir con su capacitación oportunamente. Los tipos de capacitación son los siguientes:

- Capacitación inicial:

Antes de trasladarse a los sitios costa afuera o de campo, los empleados deberán cumplir con su capacitación y los requerimientos de la matriz de capacitación. Dependiendo de los roles y responsabilidades descriptos en la matriz de capacitación, el personal recibirá también entrenamiento de conformidad con los requisitos regulatorios aplicables.

- Capacitación periódica:

Se proporcionará capacitación de actualización para asegurar la adherencia a los actuales procedimientos de HSEE y operativos. La frecuencia de la capacitación de actualización está indicada en la matriz de capacitación. Se realizarán simulacros de emergencia y evaluaciones periódicas para verificar que se mantienen el conocimiento y habilidades requeridos.

- Conocimiento, habilidades y experiencia de la fuerza de trabajo:

El personal contratado para actividades de campo y costa afuera deberá tener conocimiento y habilidades adecuados para realizar sus deberes y responsabilidades durante las fases de operación normal, puesta en marcha y cierre. Dicho personal deberá estar capacitado en procedimientos de operación/mantenimiento, modificación de instalaciones, prácticas de trabajo seguro y respuesta a emergencias, de acuerdo con el cargo.

Adicionalmente, el Procedimiento establece las líneas de comunicación que se utilizarán cuando se incorporen nuevos procedimientos o requerimientos o se modifiquen los existentes, con el fin de cumplir con la capacitación.

Capacitación del Contratista

Del mismo modo, el Procedimiento cubre la capacitación de los contratistas, estableciéndose que estos deben contar con programas de capacitación y desarrollo para sus propios empleados, los cuales deben incluir pruebas/evaluación de conocimiento y habilidades, participación, culminación exitosa y cualquier inasistencia a la capacitación o reuniones que demuestre la aptitud de los empleados para realizar sus actividades. Además, existe una serie de reglas que el contratista debe seguir. Los requisitos para el personal del contratista en términos de capacitación, competencia y experiencia se comunicarán al contratista a través de los términos y condiciones del contrato.

Su sistema de gestión de salud, seguridad y medio ambiente debe asegurar que las responsabilidades de estas 3 áreas deben estar delineadas en las descripciones de los cargos y que las matrices de capacitación y competencia detallan los requerimientos de salud, seguridad y medio ambiente del cargo y la competencia técnica. Los observadores de fauna marina serán competentes en observar cetáceos y otros animales marinos, incluyendo la estimación de distancia y presentación de informes.

A todo el personal de Equinor y del contratista se le exigirá asistir a la inducción del Proyecto para garantizar que dicho personal está consciente de aspectos ambientales tales como:

- panorama general del contenido del Plan Ambiental
- sensibilidades ambientales y riesgos clave asociados con la actividad petrolera y la ubicación
- requerimientos ambientales en cuanto gestión de residuos, manejo de sustancias químicas, transferencia de combustible y trampas de arena

- procedimientos de fauna marina incluyendo observaciones, acciones de evitamiento (zona de precaución y zona de acercamiento) e informes
- prevención, limpieza y respuesta a derrames
- reporte y registro de incidentes
- manejo de cambios

Equinor se asegurará de que todos los contratistas tengan por lo menos lo siguiente:

- Un programa de capacitación que refleje los riesgos implicados en los servicios contratados.
- Un programa de capacitación que incluya un procedimiento para capacitar nuevos empleados antes de los servicios del contratista.
- Un programa de capacitación que incluya un procedimiento para capacitar nuevos empleados antes de su primera asignación de trabajo costa afuera.
- Capacitación en los aspectos legamente exigidos a sus cargos.
- Implementación de un programa para verificar que el cumplimiento legal con los requerimientos de cada actividad se mantenga.
- Se mantengan registros de asistencia y el personal realice una evaluación después de la inducción la cual analizará la comprensión del asistente con respecto a los tópicos presentados en la inducción. El Supervisor de Perforación y el Gerente de Instalación Costa afuera de Equinor son responsables de verificar que estas inducciones tengan lugar y que se conserven los registros de asistencia.
- Los proveedores de capacitación estarán sujetos a verificaciones formales. Se deberá disponer de evidencia de la experiencia del capacitador. La descripción de la documentación para cada programa de capacitación deberá incluir los criterios de Conocimiento, Habilidades y Experiencia, así como la Experiencia del Instructor del Curso. El programa de gestión de capacitación deberá incluir evidencia de la experiencia del capacitador.
- Un procedimiento establecido para asegurar que los materiales de capacitación se mantienen al día.
- Garantía periódica de que los conocimientos y habilidades requeridos se mantienen. Los procedimientos de prueba deben ser evaluados en cuanto a su efectividad.
- Los empleados deberán asistir a capacitaciones específicas para el sitio definidas por Equinor.

Todos los contratistas deben mantener y retener registros completos para cada empleado, incluidos los programas de capacitación, prueba/evaluación de conocimiento y habilidades, participación, culminación exitosa, así como cualquier inasistencia a la capacitación y reuniones. Los registros de capacitación deben ser adecuados como para garantizar que la función de capacitación pueda ser verificada por Equinor y auditada por organismos regulatorios y agencias externas.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Documentación personal

Número:

Referencia: Documentación Complementaria

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 68 pagina/s.